



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES  
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**Garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano en el  
distrito de Ventanilla - 2016**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
ABOGADO**

**AUTOR:**

Flores Bermeo, Elthon Cruz (ORCID: 0000-0002-3140-1232)

**ASESOR:**

Mg. Israel Ballena, César Augusto (ORCID: 0000-0002-5990-1562)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Derecho Penal – Procesal Penal

LIMA - PERÚ

2021

**Dedicatoria:**

Dedicado, a mis padres, a mi pequeña hija Nicole por ser mi motivación, y a mi asesor temático por darme los parámetros para la elaboración de este trabajo de investigación, ya que contribuye a mi crecimiento como estudiante y como futuro profesional de la carrera que me apasiona, que es el derecho y las ciencias políticas.

**Agradecimiento:**

De antemano quiero agradecer a todos mis docentes que me enseñaron a valorar lo aprendido y a fomentar mi superación en cada clase, también agradezco a mis padres porque ellos estuvieron en los días más complicados de mi vida como estudiante.

Y agradecer a Dios por darme las fuerzas y las ganas de seguir y continuar con mi carrera y con la elaboración de este trabajo de investigación que me dará el título de abogado; de igual manera agradezco a Dios por seguir sano físico y mentalmente.

## Presentación

Señores miembros del Jurado:

La presente investigación titulada “**Garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla – 2016**” que se pone a Vuestra consideración tiene como propósito analizar el tratamiento que se la hace a la institución jurídica del arresto ciudadano respecto a que se debe incorporar garantías de protección para la persona común que ejerce una detención, con el objetivo de salvaguardar su integridad, su vida y su salud; por lo tanto el presente trabajo trata de rescatar aportes de la misma ciudadanía y de profesionales del derecho, sobre su opinión referente a esta iniciativa que se intenta instaurar a través de este trabajo de investigación mediante una fundamentación contundente que se demostraran a través de los resultados obtenidos.

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

El autor

## ÍNDICE

Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento .....	iv
Presentación.....	vi
Indice .....	vii
<b>RESUMEN.</b> ....	ix
<b>ABSTRACT</b> ...	x
<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	11
1.1. Realidad problemática .....	13
1.2. Aproximación temática.....	16
1.3. Teorías relacionadas al tema.....	20
1.4. Formulación del problema .....	52
1.5. Justificación del estudio.....	53
1.6. Hipótesis .....	55
1.7. Objetivos.....	56
<b>II. MÉTODO</b> .....	62
2.1. Tipo de investigación.....	57
2.2. Diseño de investigación .....	59
2.3. Escenario de estudio .....	65
2.4. Caracterización de sujetos .....	60
2.5. Población y Muestra (si fuera necesario).....	62
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.....	62
2.7. Métodos de análisis de datos .....	64
2.8. Tratamientos de la información unidad temática, categorización .....	66
2.9. Aspectos éticos .....	67

<b>III. RESULTADOS.....</b>	<b>68</b>
<b>IV. DISCUSIÓN.....</b>	<b>88</b>
<b>V. CONCLUSIÓN.....</b>	<b>92</b>
<b>VI. RECOMENDACIONES.....</b>	<b>95</b>
<b>VII.REFERENCIAS .....</b>	<b>98</b>

## **ANEXOS**

- ✓ Instrumentos
- ✓ Matriz de Consistencia
- ✓ Validación de los Instrumentos

## **Resumen**

El arresto ciudadano como figura jurídica del ámbito procesal penal regulado en la Ley N°29372 e incorporado en el artículo 260° del Código Procesal Penal Peruano, es considerado un mecanismo subsidiario muy importante para combatir la inseguridad ciudadana, así como la delincuencia a nivel nacional que cada vez se hace más frecuente; sobre todo en los sectores donde es escasa la presencia policial y las comisarias; la idea del presente trabajo es darle al ciudadano ciertas garantías de protección a través de una iniciativa legislativa que lo proteja ante una eventual lesión a sus derechos fundamentales; y de tal manera actué activamente frente a hechos ilícitos con la finalidad de frenar la delincuencia en zonas donde no hay autoridad que la reprenda y por tal condición son más vulnerables; razón por la cual se sugiere al estado a través de sus instituciones representativas proveer al ciudadano que arresta un catálogo de garantías que salvaguarde su integridad física, moral u otra índole frente a los peligros y riesgos que pudiera sufrir ante una eventual amenaza por parte del delincuente a quien arresta; es por ello que las garantías que se proponen en el presente trabajo se enfocan en la seguridad jurídica, seguridad social y seguridad económica desde un aporte al ordenamiento extranjero y doctrinario. Por lo tanto la ley de arresto ciudadano es una ley que como todas es susceptible de tener vacíos y errores, pero es parte del mismo legislador dar las herramientas para hacer de aquellas leyes perfectibles con el tiempo; y es lo que esencialmente se quiere conseguir en este trabajo de investigación.

**PALABRAS CLAVE:** *ciudadano, protección, garantías.*

### **Abstract**

Citizen arrest as a legal entity law 29372 Codex 260° in the criminal procedure field is considered a very important subsidiary mechanism to combat citizen insecurity, as well as national crime that is becoming more frequent; especially in sectors where the police presence and the police stations are scarce; the idea of this work is to give the citizen certain guarantees of protection through a legislative initiative that protects him against an eventual injury to his fundamental rights; and in this way, I actively act in the face of unlawful acts with the aim of curbing crime in areas where there is no authority to reprimand it and because of this condition they are more vulnerable; reason why it is suggested to the state through its representative institutions to provide the citizen who arrests a catalog of guarantees that safeguards their physical and moral integrity in the face of the dangers and risks that could suffer in the event of a threat from the offender whom they arrest. ; that is why the guarantees proposed in this paper focus on legal security, social security and economic security from a contribution to the foreign and doctrinal order. Therefore the law of citizen arrest is a law that like all is susceptible to have gaps and errors, but it is part of the same legislator to give the tools to make those laws perfectible over time; and this is what we essentially want to achieve in this research work.

**KEY WORDS:** *citizen, protection, guarantees.*



## **I. INTRODUCCIÓN**

El arresto ciudadano o detención por particulares establecido en el decreto legislativo N° 29372, constituye un mecanismo que posibilita a las personas a colaborar con las fuerzas del orden, en pocas palabras a la policía nacional del Perú; su finalidad es subsidiaria y excepcional, y se creó en respuesta a los altos índices de criminalidad y al aumento progresivo de la delincuencia en nuestro país, básicamente se rige bajo un presupuesto necesariamente y este la figura de la flagrancia delictiva, algunos doctrinarios conciben que el arresto ciudadano debería darse solo en la flagrancia estricta, pero la normativa no precisa eso, ya que solo se avoca a referirse a la figura de flagrancia posibilitando al ciudadano a ejecutar esta facultad en cualquier tipo de flagrancia; los inconvenientes de las cuales se puede presentar en esta figura son muchas incluida la peligrosidad en la que puede estar en riesgo el ejecutante de este mecanismo ya que el ciudadanos que ejerza una detención, estaría en riesgo de ser víctima del delincuente a quien arresta, abriendo las puertas de nueva victimización y mayor cantidad de víctimas, muchas veces los delincuentes esta premunidos de armas de fuego, arma blanca y otros, que podría ocasionar una lesión física e irremediable a la vida, los riesgos no son solo esos también se adhieren las amenazas que podrían ser víctimas los ciudadanos por el solo hecho de colaborar con la justicia e impunidad en nuestro país.

Las deficiencias de las cuales se hace referencia a esta normativa que regula el arresto ciudadano son muchas, pero con el pleno tratamiento que se le haga en distintos enfoques se puede subsanar la mayoría de las deficiencias de las que es objeto, y una de ellas es la que se va a tocar en el presente trabajo de investigación, de la cual ocasiona un grave vacío que atenta contra las finalidades propias del estado y de la constitución, que es dar las seguridades a aquella persona que pone en juego su integridad física y su vida y las de su familia; por el hecho de colaborar con la administración de justicia, seguridad pública y fortalecer la seguridad pública a través de estos mecanismos que llevan a la población a participar activamente para conservar la tranquilidad y la paz social en el país afecto de mucha inseguridad, delincuencia y criminalidad, resaltando que las distintas instituciones no pueden combatirla es necesaria la colaboración activa de los ciudadanos para hacer efectiva la conservación de la tranquilidad social.

A través de este trabajo de investigación se pretende legislar mediadas de protección para el ciudadano que ejerce el arresto civil garantizando su protección y la prevención de cualquier atentado contra su integridad física y demás derechos fundamentales a las que

está expuesto y, dada la peligrosidad de esta figura se nos hace necesario incorporarlas a través de normativas que faciliten a las instituciones del estado proveerlas con la finalidad de proteger a la ciudadanía.

El tratamiento y el análisis que se le dará a esta iniciativa es ver la forma de como incorporar estas garantías que cumplan la finalidad de proteger al ciudadano de los peligros a los que está expuesto, por el hecho de ejercer arresto ciudadano; desde un estudio al derecho comparado, y demás normativas que tengan relación al trabajo de estudio, asimismo opinión de especialistas del derecho respecto a la iniciativa que se propone, y opiniones doctrinarias, para obtener la seguridad para aquellas personas que se exponen al detener a un delincuente pero siempre provista de las garantías necesarias para su mejor resultado en conseguir la colaboración de la ciudadanía en temas de seguridad ciudadana.

La mejor orientación al ciudadano y la adecuada protección de sus derechos es la mejor garantía para las personas que afrontan cada día a la delincuencia del país; es por ello que exhortamos a las diversas entidades del estado en poder tomar en cuenta esta propuesta, porque, así como se quiere, que todos colaboremos con la seguridad ciudadana y la seguridad pública es obligación de estas instituciones salvaguardar y resguardar nuestros derechos para que no sean vulnerados de ninguna forma.

Como en un principio se mencionó la propuesta planteada se respalda a través de un tratamiento jurídico, normativo y doctrinario, así como la aportación de legislación comparada de la cual servirá para que sea más sostenible y con mayor relevancia, ya que es urgente que la población cuente con garantías para su vida y la de sus familiares frente a las represalias que podría ejecutar el delincuente objeto de aprehensión.

Es por ello que se genera la problemática que generaliza nuestro trabajo de investigación: ¿De qué manera afecta la falta de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla - 2016?

### **1.1. Realidad problemática**

Por mandato Constitucional establecido en el artículo 2 apartado 24 inciso “f” de la Constitución Política del Perú de 1993, el Estado nos menciona que nadie podrá ejercer una detención por mandato escrito y motivado por el juez, pero aduce una excepción

cuando otorga la misma potestad a los suboficiales pero solo en casos de flagrancia delictiva; la institución de la flagrancia es aquella forma de acelerar el aparato judicial tras la realización del delito, puesto que la inmediatez en que se procesa el infractor de la norma, hace que los órganos de justicia, lo procesen de manera inmediata a través del proceso más rápido y eficaz como es el proceso inmediato, uno de los procesos penales con mayor celeridad en el sistema penal, dando resultados a gran prontitud, dando la satisfacción a los justiciables en la entrega de su resolución. La flagrancia tiene algunos supuestos con las que se determina su configuración para los delitos que sean ejecutados en el momento; al igual el agente que tiene la atribución de arrestar al delincuente sería únicamente la policía nacional del Perú; pero la ley 29372, le otorga también al ciudadano esta facultad de poder ejercer el arresto de un infractor en el momento de la realización del acto delictivo, pues en aras de combatir con la delincuencia en nuestro país; y por los grandes índices de criminalidad en el estado, los ciudadanos también podrán realizar la detención, pero con ciertas restricciones que establece la ley para no caer en situaciones de arbitrariedad o se desnaturalice esta figura del derecho penal.

Pero en cierta forma el arresto ciudadano es una manera de ayuda social que garantiza contrarrestar la criminalidad en un estado, ya que la autoridad policial no se abasteca con la cantidad de suboficiales que circula en el país, es por ello que el estado, recurre a esta medida subsidiaria para combatir la delincuencia.

Es por ello que el arresto ciudadano como figura jurídica de contribución a la lucha contra la inseguridad ciudadana debe otorgarle garantías a la persona que toma esta iniciativa en beneficio del estado y el pueblo, es decir tenga un motivo para no quedar omiso ante situaciones de delincuencia; la idea es que debería recibir un estímulo para que de esta manera se pueda obtener resultados prósperos con este accionar. Básicamente en un acto de arresto ciudadano, la persona que ejecuta la detención está expuesto a que sea herido de bala o alguna otra agresión que atente contra su integridad física y su propia vida, pero de esta premisa nace la pregunta ¿quién vela por la seguridad del ciudadano común que en aras de colaborar con la justicia y erradicar la impunidad realiza esta acción pero termina siendo perjudicado físicamente?, acaso el estado le da un apoyo o una recompensa por su labor altruista o algún paquete de seguridad jurídica que lo motive a no quedar indiferente ante situaciones delictivas, pues la respuesta es **NO**, es por ello que el presente trabajo da como iniciativa mejorar esta ley del arresto ciudadano, una ley muy importante y de

mucha utilidad en el país, pero es necesaria su reglamentación donde nos establezca los estándares para ejercer de manera adecuada esta facultad, así como otorgar un paquete de seguridad jurídica para el ciudadano de a pie que realiza esta acción, para que de este modo no se encuentre en un estado de indefensión tras el riesgo que corre al ejecutar la detención al delincuente en flagrancia.

Hay excelentes aprobaciones referente a la ley de arresto ciudadano por la sociedad y ciertos grupos, de acuerdo a estudios y encuestas realizados por IPSOS apoyo el 67% de limeños aceptan y aprueban la llamada ley de arresto ciudadano; la colaboración del ciudadano en estos tiempos en que la injusticia y la inseguridad ciudadana, está cada vez más trágica; el legislador trata de coadyuvar con ese flagelo social dando alternativas de apoyo jurídico, para algunas posturas esta norma contraviene la constitución política, porque en sus preceptos nos dice que solo una persona podrá ser arrestada por resolución escrito y motivado por el juez o por la policía nacional en caso de flagrancia, mas no le da esa potestad al ciudadano, es por ello que surgió esta gran problemática, a groso modo se pudo observar otras incongruencias de esta iniciativa, ya que el ciudadano en el momento de detener a un delincuente en flagrancia podría exponer su vida como de el mismo delincuente, dependiendo del grado y la situación en que se encuentre, la problemática seria, habrá una manera de contribuir nosotros como ciudadanos en la seguridad ciudadana sin poner en riesgo nuestros propios intereses, lo que se trata de explicar si es que el ejercicio de la potestad de arresto ciudadano muchas veces es indiferente porque los ciudadanos no encontramos estímulos de parte del estado que nos hagan actuar frente a un hecho delictivo, porque siempre se van a preguntar “porque debo intervenir si posiblemente salga herido y el estado no va a ayudarme o desconozco como actuar frente a esta situación”, es decir qué garantías hay para el ciudadano para estar al servicio de su comunidad; es por ello que en muchos de los casos hay una omisión que abre las puertas a la impunidad e injusticia social, por ende su invocación a la solidaridad social, es decir un apoyo de la misma sociedad para arreglar algo que el estado debe proveer a través de sus normas. La figura de flagrancia en temas de arresto ciudadano es un requisito esencial para que se de esta potestad. La problemática de saber si es necesaria su reglamentación es lo que se desea explicar mediante un estudio para determinar respuestas validas que nos permita obtener lo que se desea, el arresto ciudadano tiene acogida para la ciudadanía y de esta manera se dé un freno a la impunidad en la actividad criminal, gracias a estas

herramientas que el estado nos brinda para ejercerlo de manera consiente, sin vulnerar derechos constitucionales en aras de la justicia social y respetando el estado democrático de derecho.

## **1.2. Aproximación temática**

La presente investigación se respalda en los siguientes antecedentes nacionales e internacionales:

### **El arresto ciudadano en relación con la libertad personal**

El objetivo general fue analizar la medida de coerción procesal penal del artículo 260 referido al arresto ciudadano en el código procesal penal en relación de la libertad personal en la constitución política del Perú, respecto a la detención y al arresto ciudadano, llegando a la conclusión que a través de la investigación científica que el arresto ciudadano vulnera el derecho a la libertad personal aplicando el diseño no experimental, respecto al tipo de investigación es de carácter cualitativa- explicativa, asimismo el nivel de investigación es de carácter explicativa y en consecuencia es de un enfoque cualitativo, la figura del arresto ciudadano, en su propia forma vulnera lo que es derechos fundamentales consagrados en la constitución, protegidos penalmente, por su contenido inconstitucional, la forma de colaborar con la justicia sin límites y control en el actuar ciudadano, por desconocer la norma, se genera abusos por la misma ciudadanía y riesgos en la integridad física de la persona humana (Capira, 2014, p.11).

### **El arresto ciudadano y la vulneración a la libertad individual**

El objetivo del presente trabajo fue demostrar si el arresto ciudadano mal utilizado por las víctimas y/o la población genera la violación de la libertad individual de personas inocentes, para lo cual utilizó el método cualitativo, descriptivo, explicativo, correlacional y exploratorio, llegando a la conclusión de la presente ley en cuestión vulnera el derecho elemental a la libertad individual que está consagrada por la declaración universal de los derechos humanos, por lo que se detecta que este bien jurídico tutelado ha quedado a disposición de toda persona para hacer lo que crea conveniente con él, los cuerpos jurídicos y normativos consagran su protección sin embargo con la presente ley se pone en riesgo constante su vulneración a merced de intereses ocultos como falsas denuncias,

venganzas, abusos de derecho, arbitrariedades y no conforme a la legalidad que debe imperar para su limitación y afectar la libertad individual de toda persona; por lo tanto el autor busca que la presente ley sea revisada y modificada en su contenido y atribuciones a fin de preservar y proteger la libertad individual como derecho sustancial de la persona (Mestanza, 2014, p.45).

### **Gestión municipal de la seguridad ciudadana y nivel de participación vecinal en la seguridad ciudadana de los Olivos – 2014**

El objetivo fue determinar la relación entre gestión municipal de seguridad ciudadana y la participación vecinal de seguridad ciudadana en los Olivos - 2014, para lo cual utilizo el método cuantitativo, no experimental de tipo explicativo y descriptiva e inferencial, llegando a la conclusión en que si existe relación significativa entre la planificación y la participación vecinal de seguridad ciudadana de los Olivos – 2014; porque el direccionamiento y la planificación nos permite implementar un plan de seguridad ciudadana coordinado con la policía nacional, el serenazgo y los vecinos de la localidad, a fin de instalar cámaras, mejorar la iluminación en la avenidas, jirones, calles y pasajes vía convenio con Edelnor, capacitación, talleres por sectores conforme a sus necesidades toda vez que la seguridad somos todos. De igual forma la seguridad ciudadana es un bien público que el estado debe garantizar y proteger, enfrentando así la violencia y fomentar la seguridad; y es necesario requerir un tratamiento integral a mediano plazo, la seguridad ciudadana es tomar medidas oportunas y eficaces a fin de combatirla rápidamente (Ossandon, 2015, p.86).

### **Seguridad ciudadana en el distrito de Huaura, 2014**

La finalidad del presente tema de investigación fue describir el estado de la seguridad ciudadana en el distrito de Huaura, para lo cual utilizo el método cualitativo, es una investigación básica , no experimental y de nivel descriptivo, llegando a la conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación en que el distrito de Huaura es una ciudad insegura y que el barrio más peligroso es El Carmen, lo que nos lleva a concluir que el distrito de Huaura es percibida como una ciudad insegura en la que la población no se siente protegida y debe tomar medidas de seguridad para salvaguardarse de la

delincuencia, ya que califica el trabajo de la policía y de serenazgo como mala, agregando que esto se debe a que la policía está llena de agentes corruptos (Meléndez, 2015, p.79).

### **1.3. Teorías relacionadas al tema**

#### **Generalidades**

##### **Concepto de arresto ciudadano**

Según el fiscal de la nación define el arresto ciudadano como aquella facultad que tiene todo ciudadano en casos de flagrancia, en la entrega de los detenidos a las autoridades pertinentes; para el fiscal de la nación Pablo Sánchez Velarde suceden casos en los que la persona detenida es puesta en libertad, pero de allí a hacer justicia por mano propia hay que tener mucho cuidado; lo más resaltante es que la sociedad se organice para trabajar en conjunto con la Policía y el Ministerio público.

El nuevo Código Procesal Penal del 2004 nos define el arresto ciudadano como el arresto o aprehensión que constituye una variedad de detención por la cual cualquier ciudadano puede detener a una persona que está delinquiriendo o ha delinquido en condiciones de flagrancia y conducirlo en el plazo más pronto posible a la dependencia policial más cercana. Buscando de esta manera lograr el compromiso y participación ciudadana en aminorar los actos delictivos o la consumación de ellos.

Para Medina, sostiene al respecto:

[...] establece que el arresto ciudadano, es la posición habilitante excepcional que otorga a una persona a realizar el arresto ciudadano, mas no a violar bienes jurídicos protegidos como el derecho a la libertad, derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana, es mérito destacar que una de las desventajas que radica fundamentalmente cuando se procede al arresto ciudadano, se puede llegar a tomar la justicia con sus propias manos, por parte de los pobladores (2009, p.57).



“El arresto ciudadano realizado por los particulares que constituye una facultad mas no una obligación que asiste a todo ciudadano a privar de la libertad deambulatorio a otro, en los casos de delito flagrante” (Sendra, 2004, p.489).

“El arresto ciudadano es aquella restricción de la libertad de movimientos a una persona porque ha cometido un delito en su presencia y así poder entregarlo a las autoridades del orden público, para ser llevado ante un magistrado para enfrentar cargos criminales” (Pagan, 2014, p. 20).

Para Kadagand (2004) el “arresto ciudadano es el acto material transitorio de privación de la libertad, que no supone propiamente encarcelamiento, y que obliga al ejecutante a poner inmediatamente al aprehendido a disposición de la autoridad policial” (p. 49).

Para Chang (2010) “el arresto ciudadano es la privación de la libertad de una persona debido a la constatación de la comisión de un hecho delictivo tipificado como delito en el Código Penal” (p. 14).

La variación legislativa que ha tenido esta figura del arresto ciudadano ha sido para el mejoramiento en el actuar del ciudadano respecto a esta potestad; al igual que su definición clara; su restricción es necesario; porque así como es un mecanismo muy importante para combatir con la delincuencia es una herramienta que debe ser reglamentada para posibles excesos generados por el uso del arresto ciudadano en la flagrancia delictiva, ya que esta figura es un presupuesto del arresto ciudadano, y su reglamentación sería necesario para muchos puntos de la ley que regula el arresto ciudadano, la tarea es hacerla perfectible para apartarla de algún vacío, que ocasione descontento social y futuras arbitrariedades, es muy importante observar de parte del legislador, que el ciudadano que está al servicio de su comunidad, al momento de hacer ejercicio de la facultad de arresto ciudadano es necesario que este tenga un paquete de seguridad jurídica de parte del estado para que de una manera sea valorado el esfuerzo y el riesgo que correría para este accionar, como una forma de prevenir posibles circunstancias ocurridas durante el arresto ciudadano, en pocas palabras que se indemnice y se otorgue seguridad social , económica y jurídica para este ciudadano que por su valentía se somete a una situación tan peligrosa, hay ciudadanos que no tienen un trabajo, que solo se mantienen por trabajos temporales o transitorios, es decir no gozan de un trabajo y mucho menos de un seguro médico, la pregunta es ¿quién va a costear los

gastos de hospitalización por las lesiones que generaron la acción de arresto ciudadano?, el estado de indefensión que puede correr el ciudadano por no haber alguna norma que lo ampare ante tales situaciones donde su integridad pueda ser afectada, son uno de los inconvenientes que tiene la ley de arresto ciudadano, de todo este análisis se concluye diciendo que las garantías que deben asegurar al ciudadano al arrestar a un delincuente deben estar previstas en una ley para que no haya desamparado, asimismo se pueda estimular a la ciudadanía a actuar frente a un hecho delictivo, y desaparezca la impunidad y falta de justicia para aquellos delincuentes que actúan en zonas donde hay menos presencia policial, pero donde debe haber una comunidad preparada y lista para afrontar estos problemas sin pensar que no serán recompensados o el estado no los ayudara si son afectados físicamente o resultaran perjudicados.

### **Proyecto de ley N° 2155 – 2007**

El presente proyecto de ley presentado por el ejecutivo durante el gobierno de Alan García, hace mención sobre la entrada en vigencia en todo el país del artículo 260 del código procesal penal aprobado por decreto legislativo 957, donde regula la figura del arresto ciudadano; dando sus fundamentos en que es una figura que se regula en algunos países latinoamericanos, como es el caso de Argentina, Bolivia, Estados Unidos y México; por lo tanto proponen la entrada en vigencia de esta figura por tanto que está en vigencia en otras naciones; exhortando a que la población participe de la forma más activa posible en temas de seguridad ciudadana, para el aseguramiento de la paz y la tranquilidad social, y con la finalidad de combatir con mayor eficacia la delincuencia.

### **Proyecto de ley N° 2030 – 2007**

En el proyecto de ley mencionado es propuesto por el alcalde de Jesús María Enrique Ocrospoma Pella, donde propone la vigencia del artículo 260 del código procesal penal que regula el arresto ciudadano, en todo el territorio nacional a efectos de que su promulgación sea regular eficazmente para la intervención y el arresto efectuado por serenos o personal de vigilancia a implicados en hechos delictivos. Ya que el alcalde tenía un inconveniente ya que los servicios de serenazgo no podían intervenir eficazmente en auxilio a los ciudadanos por no contar con una base legal que les faculte la detención de los implicados

en hechos delictivos y su inmediata conducción ante la autoridad policial, esto generaba para el alcalde que se frustran todos los programas para combatir la delincuencia en su distrito de la cual gestionaba, por lo tanto presenta la propuesta de que la normativa de arresto ciudadano entre en vigencia lo más pronto posible, por el avance progresivo de la criminalidad, y por la falta de eficiencia en la actuación de su cuerpo de serenazgo al no tener normativa que lo respaldan para proceder al arresto de infractores en flagrancia delictiva.

### **Dictamen 2030 – 2012 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos**

En el presente dictamen se analizan lo que son los proyectos de ley 2150 y 2030 del año 2007 donde proponen adelantar la vigencia del artículo 260 del código procesal penal el cual regula la figura de arresto ciudadano, tomando la decisión de aprobar mencionados proyectos de ley por tener un respaldo internacional en el derecho comparado ya que se regula en los países de Nicaragua, Bolivia, Argentina y Estados Unidos; y un respaldo constitucional ya que se regula en el artículo 2, inciso 24 literal b, en donde se recoge la “restricción de la libertad individual”, por lo tanto cumpliría con los requisitos exigidos por ley, considerando aprobar los respectivos proyectos antes mencionados por mayoría de los miembros de la comisión de justicia y derechos humanos.

### **EL arresto ciudadano en legislación comparada**

Para entender lo que es el arresto ciudadano se dará unos alcances de acuerdo al tratamiento que se le hace en distintas legislaciones y de qué manera se encuentra regulado.

### **En el derecho Chileno**

Según el artículo 129 del código procesal Chileno, establece que cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima, en la norma en mención nos da la posibilidad que nuestro mismo cuerpo legal de poder aprehender a una persona que comete un delito en flagrancia, pero con el requisito de que se encuentre en flagrancia delictiva es por ello que es muy importante el artículo que

regula el concepto de flagrancia, ya que este es un requisito importante para que se configure el arresto ciudadano y no sea catalogado como un arresto ilegal.

En pocas palabras el arresto se puede realizar en cualquier forma de flagrancia que consigna el artículo 259 de nuestro ordenamiento legal, pero la pregunta es que en ningún momento se menciona la protección que debe tener el ciudadano al arrestar a un delincuente, no se ha hecho un tratamiento ni un análisis de qué manera el estado le brinda las garantías al ciudadano que podría ser perjudicado físicamente y de distintas maneras durante su buena acción en colaboración con la administración de justicia.

### **En el derecho Uruguayo**

En Uruguay también es muy tocado el tema de arresto ciudadano, inclusive se ha visto casos en los que ciudadanos uruguayos se enfrentan a delincuentes para ser entregados a la autoridad policial y de esta manera ser procesados por el delito que cometieron, a sabiendas el riesgo que corren, pero en este estado este tipo de acciones son muy valoradas en cierta forma.

Un caso se presentó en la ciudad de Solymar en Uruguay unos jóvenes procedieron a cumplir un arresto ciudadano que llevó al procesamiento del delincuente quien, no es ocioso agregar, también sería rapiñero, consumidor de cocaína, marihuana y hongos alucinógenos. Es de destacar la prontitud y el esmero con que la policía apoyó a los jóvenes y que la jueza del caso, doctora Adriana Graziuso dijo que quería “destacar el proceder de los vecinos porque es algo que no pasa siempre”; la labor de estos ciudadanos jóvenes arriesgados serían premiados y recompensados por el estado uruguayo por su noble proeza.

Corresponde abundar en cuanto a este tema ya que el episodio se inscribe adentro de precedentes heroicos de uruguayos que se han jugado enteros a la hora de ser solidarios. En el país de Uruguay a este tipo de ciudadanos se les denomina **“héroes civiles”** y como tal se les da un nombramiento y un respaldo por el estado por su noble y heroica acción; cosa que no sucede en el Perú; porque en casos de arresto ciudadano la policía y el estado no reconoce un beneficio para el ciudadano que cumple con una acción e pro de su país y su comunidad, es por ello que se intenta lograr que en nuestro estado se den estas

prerrogativas que en fin a cuenta no son insignificantes sino muy importantes, porque se los otorgan a ciudadanos que se lo merecen por acciones riesgosas como estas, independientemente de que sea una facultad en todas partes se va presenciar a un ciudadano indignado por las tasas de delincuencia, y que estando en la situación en presenciar un delito en flagrancia pocas veces se quedaran de brazos cruzados y procederán a intervenir en lo que sea posible. En el estado Uruguayo el que ejerce arresto ciudadano son dignos de ser llamados “**héroes civiles**”, siendo este digno de ser reconocido y recompensado por su valerosa acción, de parte del estado con ciertos incentivos de distinta índole para que no quede a la deriva y de manera injusta su acción que implica un riesgo y que de cierta forma contribuye con el estado en temas de seguridad ciudadana; para lo cual es merecedor de una garantía de distinta índole de acuerdo a lo que el estado lo crea conveniente; es por ello que aquel sistema debería ser incorporado a nuestro país, para que de esta manera se fomente el accionar del ciudadano frente a hechos delictivos y no tenga en cuenta la indiferencia del estado tras su accionar.

### **En el derecho Argentino**

Para el código argentino es más radical y obliga al ciudadano a efectuar un arresto, mas no lo faculta es decir que es una acción de carácter obligatoria porque la ley de esa nación así lo determina; pero lo más importante es que solo se procederá al arresto a aquellas personas que han cometido delitos de acción pública mas no delitos de carácter privada, es la diferencia con nuestra legislación peruana. “Puede deducirse a partir de una interpretación coherente y sistemática de dicha norma y del contenido esencial del derecho a la libertad” (Chang, 2010, p.12).

Después del análisis de la normativa argentina con referencia al arresto ciudadano se sigue con la pregunta en que la legislación argentina, no se conoce respecto a las garantías que gozaría una persona que ejerce el arresto ciudadano, si termina afectado por tal labor altruista; pues se debería tratar en la diferentes legislaciones para que no se dé cabida a posibles arbitrariedades al ciudadano que actúa de buena fe y que por su buena acción termina desamparado.

### **En el derecho Ecuatoriano**

El artículo 161 del código de procedimientos penales ecuatoriano también regula la detención por delito flagrante, al establecer que: “En caso del delito flagrante, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a la policía y ésta, a su vez, al juez competente”.

Es decir que en la norma ecuatoriana al regular el arresto ciudadano el término de arrestar cambia por el de aprehensión, términos muy distintos, porque el que puede arrestar es la policía nacional mas no el particular y aprehensión seria la palabra más apropiada para definir el arresto ciudadano.

### **En el derecho Francés**

El arresto ciudadano en la legislación francesa se estipula en el Código Procesal Penal Francés señala en su artículo 73 que “En los casos de crimen flagrante o de delito flagrante castigado con una pena de prisión, cualquier persona estará cualificada para detener al autor del mismo y conducirlo ante el oficial de policía más próximo”. Esta norma francesa faculta al particular a detener a una persona que contraviene la ley, para efectos de no dejarla impune, y que sea castigado por las autoridades pertinentes, como se puede apreciar esta figura se ejecuta de acuerdo a un solo requisito la flagrancia delictiva, sin ello no se podría dar este mecanismo; pero donde queda la protección que debería tener el ciudadano que practica esta facultad o la víctima de la misma acción que califica como delito; cual es la norma o el reglamento que protege a la víctima o al ciudadano que ejerce arresto contra un delincuente si resultara herido, ningún estado tuvo en cuenta ese punto tan importante para salvaguardar derechos fundamentales.

Los ordenamientos jurídicos contemplan esta figura jurídica, por ser necesaria y un mecanismo eficaz en contribución para combatir la inseguridad ciudadana, un problema a nivel internacional.

### **En el derecho de Estados Unidos de América**

En la legislación de Estados Unidos de América consagran la figura de arresto ciudadano en los dispositivos legales que permiten el “citizens arrest” en español la figura de arresto ciudadano, conforme se puede apreciar en los artículos 837 del “California Penal Code”;

asimismo en los artículos 140.05 del “New York penal Code”, lo que se puede apreciar de esta facultad en los Estados Unidos es que está siendo aplicada mediante parámetros que no hace que tenga errores, y en su misma carta magna en el artículo 16 donde se dice que en delitos flagrantes, cualquier persona puede detener al inculcado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata.

Las detenciones de ciudadanos están sujetas a menos requisitos constitucionales que una detención por agentes de la ley, pero los arrestos de ciudadanos siguen teniendo normas que los rigen. El incumplimiento de estas reglas puede resultar en responsabilidad civil y penal para el individuo que lo arresta.

Una persona puede arrestar a alguien que razonablemente sospecha de haber cometido un delito, incluso si el delito no ocurrió en presencia del individuo que hizo la detención. Mientras se cometa un delito grave y el individuo que hace la detención conoce el crimen, una sospecha razonable sobre la identidad del autor justificará su arresto.

El delito grave debe haber ocurrido realmente antes de que un individuo pueda hacer una detención de los ciudadanos. Incluso si una persona cree razonablemente que ha ocurrido un delito grave, si el crimen no ocurrió de hecho, la persona que hizo la detención podría convertirse en civil y criminalmente responsable.

### **Violaciones de la paz**

En general, la gente no puede usar detenciones ciudadanas por delitos menores a menos que el delito leve implique una violación de la paz. Incluso en estas circunstancias, sin embargo, las personas sólo pueden realizar arrestos cuando han sido testigos de la conducta criminal y la infracción acaba de ocurrir o hay una fuerte probabilidad de que la violación continuará.

### **Constitucionalidad del arresto ciudadano en Estados Unidos**

De acuerdo a su constitucionalidad como se mencionó anteriormente, una detención de ciudadanos no lleva consigo los mismos requisitos constitucionales que se aplican a la detención de agentes de la ley. Sin embargo, si una persona actúa a petición de la policía,

cualquier arresto que lleve a cabo debe cumplir los mismos estándares constitucionales que una detención por parte de los propios agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Por ejemplo, una detención de ciudadanos a petición de las fuerzas del orden público todavía tendría que cumplir con las restricciones de la Cuarta Enmienda a las búsquedas e incautaciones no razonables y su requisito de autorización. Un ciudadano también podría ser procesado bajo estatutos que hacen delito privar a alguien de sus derechos constitucionales. Sin embargo, si un ciudadano actúa por iniciativa propia al hacer la detención, esas mismas restricciones constitucionales no se aplican.

### **Fuerza razonable**

A pesar del hecho de que los arrestos de ciudadanos no tienen los mismos requisitos constitucionales que un arresto típico, los individuos solo deben usar la cantidad de fuerza que sea razonable y necesaria para realizar la detención. Lo que constituye exactamente la cantidad razonable y necesaria de fuerza depende de los hechos que rodean cada detención. Por lo general, los jurados examinarán los hechos que rodean a una detención ciudadana y determinarán si se trata de una fuerza excesiva.

El uso de fuerza excesiva puede abrir al individuo que lo arresta a la responsabilidad civil y penal, y esto es especialmente cierto cuando las personas usan una fuerza letal para detener a los criminales. Los Estados tienen normas diferentes sobre el uso de la fuerza letal durante la detención de los ciudadanos, y el incumplimiento de la ley en este ámbito puede resultar en graves consecuencias.

Algunos estados prohíben el uso de la fuerza letal excepto en circunstancias en que la persona que hace la detención u otra persona se enfrenta a la amenaza de lesiones corporales graves o el uso inmediato de la fuerza física mortal. En estas situaciones, la persona que hace la detención puede usar la fuerza letal para prevenir el daño a sí mismos o a otros.

Otros estados permiten a las personas que hacen una detención de los ciudadanos a utilizar la fuerza letal para detener a un detenido que huye, siempre y cuando la persona que hizo la detención usó métodos razonables para hacer la detención. Algunos estados van más allá y requieren que la persona que usa la fuerza mortal intente primero detener al sujeto de la



detención, y otros estados requieren persecución y una intención declarada explícitamente de arrestar antes de usar la fuerza mortal.

Cualquier uso de fuerza letal durante una detención ciudadana que no cumpla con la ley estatal aplicable podría resultar en cargos de homicidio o asesinato contra el individuo que lo arrestó, así como un juicio por muerte injusta de la familia del presunto delincuente.

En Estados Unidos son más minuciosos en el cuidado de sus ciudadanos y tienen muchas más herramientas que potencian la norma que regula el arresto ciudadano; inclusive en la seguridad de los que practican esta facultad que les otorga la ley, salvaguardando su integridad y dignidad humana, según establecido en su constitución política, la necesidad de que nuestro país cumpla tales principios es necesario dar un énfasis en el análisis de las problemáticas que pueden tener algunas normas y los vicios que pueden tener; en el presente trabajo se trata de explicar porque es fundamental centrarse en la protección del ciudadano que se expone en arrestar a un delincuente, ya que estos están premunidos de armas y por tanto es un riesgo inminente donde el estado debe estar al tanto y donde debe proveer de garantías para salvaguardar a la persona.

### **En la legislación Colombiana**

En el estado de Colombia en la ley N° 975 de 2005 se incorpora mediante decreto N° 3570 del año 2007 el sistema de protección de víctimas, testigos, peritos y ciudadanos que arrestan, razón por la cual fundamentan en la incorporación del ciudadano que arresta por el grado de peligrosidad que implica su acción, por cuanto, el ciudadano tiene una función garantizadora en la persecución penal del delito y en la colaboración de la seguridad ciudadana, ya que dada la peligrosidad de su intervención dentro de los que es la persecución del delito como colaborador de la administración de justicia y servidores públicos en frenar la delincuencia y como fundamento el estado colombiano en respaldo de su carta magna debe garantizar la plena seguridad personal y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos para prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, asimismo los daños que podrían sufrir estos ciudadanos estarían subsumidos a las mismas prerrogativas que las víctimas y testigos, en cuanto a la asistencia médica, reparación de daños y garantías frente a un riesgo contra su vida e integridad, excelente trato frente a las autoridades y su

colaboración sea considerada prueba relevante ante los procesos judiciales que sea sometido o no, esta ley así como incorpora un sistema que permite la ayuda y protección a las víctimas y testigos también incluye medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad del ciudadano colombiano que arresta a delincuentes en flagrancia delictiva tal como lo establece en el artículo 302 del código de procedimiento penal ley 906 – 2004; donde faculta a cualquier persona en capturar a un delincuente que sea sorprendido en flagrancia delictiva.

Que si bien es cierto que para el derecho colombiano según el artículo 13 numeral 2 de la ley 3570 del 2007, que para que un testigo o víctima tenga derecho a las medidas de protección, se deberá adoptar mediante audiencia preliminar por el magistrado de control de garantías, pero muy distinto para el ciudadano que arresta, que las garantías se adoptaran de manera inmediata en caso de que sea amenazado contra su integridad personal o la de su familia, esto debiéndose hacerse después de que el ciudadano ponga a disposición el delincuente a la autoridad policial y este al ministerio público a efectos de ser procesado.

### **En la legislación Española**

En la legislación española dadas las múltiples casos en que el ciudadano tiene la función de arrestar a un delincuente en flagrancia delictiva establecido literalmente en el artículo 490 de la ley de enjuiciamiento criminal, donde dispone que todo ciudadano está autorizado a detener a otro bajo los siguientes 3 supuestos en casos de flagrancia, fuga y rebeldía de manera textual. Y en visto de que el ciudadano al efectuar esta acción expone evidentemente su integridad física, la vida y su tranquilidad personal, se toma la decisión a través de la ley N° 19909 del 2011 promovida por el congreso de diputados en el gobierno del rey de España Juan Carlos I, donde se sugiere crear un sistema de defensa y protección al ciudadano que cumple la función de arrestar en casos de flagrancia, rebeldía y fuga, muy aparte del proceso penal y la colaboración de testigos y víctimas dentro del proceso como valiosísima prueba que eso implica en el tema de flagrancia delictiva, también a eso opera el caso de fuga y de rebeldía, en el supuesto en que el imputado habiendo sido sindicado y posteriormente juzgado manifiesta su condición de rebelde o por razones de impericia de parte de las autoridades de los centros penitenciarios, un procesado fugase de su celda, entra a tallar la colaboración del ciudadano español, donde se le designa la función de

colaborar en su captura porque así lo establece el artículo 490 de la ley de enjuiciamiento penal, el cual regula la figura jurídica de arresto ciudadano, pues la casuística nos lleva a lo más concreto, puesto que en el proyecto legislativo se sustenta que la población española se resiste a colaborar en estos supuesto ya que poseen el temor de ser amenazados y que los delincuentes objeto de aprehensión busquen represalias a su persona, lo cual trae una difícil e inaccesible justicia y equidad, puesto que el gobierno no ha provisto de normas destinadas a proteger al ciudadano que arresta a través de programas más efectivos, que salvaguarden a la ciudadano frente a estos posibles riesgos, las mismas prerrogativas que gozan el testigo y la víctima incluso peritos, también debe adherirse garantías y medidas de protección al ciudadano que ejerce arresto contra delincuentes y asimismo surge la apreciación racional del grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas o alguna de las medidas legales de protección que considere necesarias y que se ha entendido ser imperiosa e indeclinable la promulgación de las normas precisas para hacer realidad aquel propósito de protección del ciudadano como autor principal en la defensa de la seguridad y la erradicación de la impunidad del delito. Las directrices del presente proyecto se someten a la realidad del país y de los vacíos legislativos que denota nuestro cuerpo normativo.

Según el autor Torres nos dice al respecto que:

[...] El ciudadano que arresta es un colaborador más de la persecución penal y por tales razones debe estar provisto de las garantías para resguardar su seguridad física y moral frente a los riesgo que conlleva arrestar a un delincuente peligroso (2009, p.79).

Pues de esta manera el autor trata de explicar que la mejor forma de colaborar con la justicia es ayudar a al gobierno con la persecución del delito, para que de esta manera se pueda combatir con la delincuencia que asecha progresivamente a distintos sectores del país, pero a esto también es importante resaltar que el ciudadano así como colabora con su sociedad en la colaboración de capturar delincuentes, es necesario que estos estén provistos de garantías para su seguridad, y razón por la cual deberá estar regulado por una ley o reglamento que lo establezca para que se haga más eficiente

### **Finalidad del arresto ciudadano**

El objetivo del arresto ciudadano básicamente comprende lo que es combatir con la delincuencia y la falta de seguridad en el país, dándole esta facultad legalmente válida a cualquier ciudadano a detener a un delincuente en flagrante delito, de esta manera contribuye con la administración de justicia, que servirá de mucho para la sociedad misma. La tarea del ciudadano es colaborar con la fuerzas del orden y de los servidores públicos como los serenazgos, en lo que respecta a disuadir cualquier acto vandálico y de violencia, asimismo es una forma de apoyo para reducir los altos índices de criminalidad que se presentan a diario en las calles del país y del mundo; la finalidad de la institución del arresto ciudadano es fortalecer el sistema penal así como policial y de justicia social, donde se ve esta figura de arresto, como una forma subsidiaria de actuar, tras la escasa cantidad de oficiales en las calles.

De cierta forma esta ley le otorga al sereno de un determinado lugar tener esta facultad de arrestar a un delincuente flagrante, ya que antes no tenía esta potestad, y solo se encargaban de disuadir al delincuente y lo limitaba en cuanto a su actuar o solo tenían que esperar a la autoridad competente para la detención correspondiente pero esto demoraba y ocasionaba retraso y la fuga del infractor de la ley. Los ciudadanos tenemos el derecho de escoger y opinar respecto a las leyes que le sean de su interés y que puedan afectar sus derechos y por ende este tema del arresto ciudadano es un tema importante y la necesidad de saber los alcances a los cuales se debe sujetar la persona que quiere hacer uso de esta potestad que debe ser ejercida de manera responsable y con respeto a la ley, asimismo los requisitos que la hacen legal.

La defensoría del pueblo, a través de su adjunto, Roberto Pereira, quien señala que la norma es positiva siempre y cuando el ciudadano cumpla con los requisitos que exige la ley.

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, señala que dicha norma facilitara no solo la participación ciudadana sino también el trabajo del serenazgo.

Del mismo modo el ex primer adjunto de la defensoría del pueblo, Samuel Abad Yupanqui, quien señala que es excepcional y que está sustentada en el código procesal penal y admitida por la constitución, aunque no de manera expresa, pero que podría desnaturalizarse y devenir en justicia con propia mano, por lo que debería precisarse su real alcance.

La naturaleza del arresto ciudadano, es una figura aceptada por distintos especialistas, su propósito es contribuir con la seguridad ciudadana, dando la oportunidad necesaria y

oportuna del ciudadano como herramienta subsidiaria, para aquellas zonas donde es más escasa la presencia policial, que puedan asumir la responsabilidad de atrapar delincuentes que violan la norma y ocasionan un perjuicio a la sociedad en su conjunto; la ayuda del ciudadano es fundamental y esto fue tomado en cuenta por el legislador; pero como toda norma tiene ciertos desperfectos, que deben ser subsanados y por ello es que como estudiante y futuro profesional al momento de analizar la norma en cuestión se observó que la facultad que se otorga al ciudadano mas no una obligación, pero la necesidad de proteger al ciudadano frente a una lesión o perjuicio de otra índole, que se da en el arresto ciudadano, es lo que se debe garantizar y es un papel del estado que debe tomar en cuenta, ya que muchos casos se han dado en que una persona que ejerce el arresto termina lastimado, lesionado e incluso termina muerto, porque los delincuentes usan armas de distintas clases, que ocasionan una lesión grave al ciudadano que por obrar bien, es herido inevitablemente. El estado debe optar por proteger al ciudadano de a pie que ejerce arresto a delincuentes avezados, que ocasionan un malestar social, la importancia de recompensar a estas personas que arriesgan su vida por contribuir con la seguridad pública, la iniciativa de otorgarles un paquete de seguridad a través de una ley es un tema que se debe tomar en cuenta por nuestros legisladores para que no haya desprotección ciudadana, la constitución en su artículo 1, exhorta al estado a proteger a la persona humana y garantizar el respeto de su dignidad ya que es el fin supremo de la sociedad y del estado en si mismo.

### **Alcances del arresto ciudadano**

De acuerdo a Cárdenas nos manifiesta al respecto:

[...] Que los ordenamientos jurídicos actuales para garantizar el derecho a la libertad individual han establecido el principio de reserva judicial o reserva de jurisdicción. En virtud de tal principio las limitaciones a la libertad personal sólo pueden venir, por regla general, de actos emanados de autoridades encargadas de administrar justicia, en aplicación de normas de rango legal en las cuales se encuentran señalados con precisión, los motivos y los procedimientos para afectar la espontánea determinación de las personas en el plano físico (2009, p.76).

De acuerdo a esta opinión en que el derecho a la libertad personal en cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se afecte la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora mediante detenciones informales o condenas arbitrarias conforme lo establece nuestra Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, debido a que es una medida excepcional, se deben de cumplir expresamente los requisitos establecidos por ley a fin de no caer en arbitrariedades.

Esta modalidad de estar al servicio de la comunidad en cuanto a nuestra seguridad ciudadana es una excelente iniciativa legislativa.

Para Reátegui sostiene al respecto:

[...] Que la detención policial y arresto ciudadano, es una facultad puramente material, pues se reduce a la mera captura que esta seguido de la presentación del capturado a quienes imparten la orden de detención, la policía tiene el deber de capturar a los sospechosos en flagrancia delictiva, mientras que los particulares se les reconoce solo una facultad, a modo de colaboración ciudadana con la justicia, no se les impone capturar a todos los delincuentes debido a los riesgos que puede acarrear tanto el agraviado como el arrestado o detenido” (2006, p. 109).

Este punto de vista nos hace entender y distinguir lo que es facultad y lo que es deber de las autoridades policiales; porque en el primer caso los ciudadanos tienen la posibilidad de colaborar con la justicia mas no la obligación ya que este podría exponerse a salir herido en la intervención que haría frente a un hecho ilícito, por otro lado la autoridad policial si tiene el deber de detener y aprehender al delincuente en un hecho ilícito al igual que realizar actos de identificación e investigación mas no el ciudadano común y corriente, para efectos de cumplir con su función esencial, es por ello que los dos términos son muy distintos pero ambos necesarios, para la colaboración con la sociedad y el estado.

Las detenciones por particulares son facultades otorgadas a las personas individuales. Se encuentran relacionadas con el deber de colaboración que todos tienen con la Administración de Justicia y con el de comunicar a la autoridad judicial la comisión de hechos delictivos.

Cabe precisar la facultad de arresto ciudadano solo es conducir al arrestado de inmediato a la dependencia policial o autoridad competente sin recurrir a actos violentos que atenten contra la integridad del aprehendido al igual que ejecutante del arresto. Para lo cual se debe presentar necesariamente la figura de flagrancia delictiva, mas no que se realice porque a uno se le ocurra por un acto de venganza o de otro tipo de interés oculto, es por tal razón que en estos casos se debería expedir un reglamento que facilite al ciudadano a poder tener conocimiento de cómo actuar en casos de flagrancia, al igual que todo ciudadano así sea miembro del serenazgo pueda obtener alguna recompensa o alguna garantía de parte del estado que asegure la afectación física obtenidas por su intervención, como por ejemplo una lesión o alguna afectación a su cuerpo o su salud.

Oe de tal manera crear un sistema de protección al ciudadano que arresta, con la finalidad de asegurar el resguardo de su integridad física y moral frente a un peligro o riesgo desconocido, que para este viene siendo el riesgo que puede sufrir el ciudadano que arresta a un delincuente peligroso, al ser vulnerados a la gama de intimidaciones, amenazas y represalias que inminentemente se va dar dado la peligrosidad del arrestado y sus herramientas de causar miedo.

Es por ello que Lamas nos dice al respecto:

[...] Que para que la normativa de arresto ciudadano tenga mayor eficacia, sería necesario reglamentarla, a través de un decreto supremo para darle mayor elasticidad. Lo fundamental es poner en claro lo que significa el arresto, sus condiciones o circunstancias, límites al uso de la fuerza, tiempo del traslado a la autoridad, inclusive las responsabilidades en que incurrirían los ciudadanos cuando excedan estas atribuciones (2011, p.55).

Asimismo bajo la propuesta del mencionado autor se intenta integrar las garantías que deben proteger al ciudadano común que cumple esta facultad, para que en posibles circunstancias no se vea desamparado por el estado y más bien recompensado por su labor altruista en beneficio de su comunidad.

Para el autor Yépez nos dice:

[...] Que la participación de la comunidad para la seguridad ciudadana es la activa cooperación de los vecinos para resolver, conjuntamente, los problemas de criminalidad y violencia de sus barrios y distritos. Es compartir responsabilidades para la conservación del orden y la tranquilidad, es comprometerse con la vecindad para colaborar con la policía y con el municipio de su distrito. Es colaborar en aspectos preventivos e informativos y de proyección social (2004, p.34).

El autor es claro en sus palabras, respecto a la colaboración activa del ciudadano para combatir la criminalidad y los índices altos de delincuencia, en algún punto del país; la idea es promover a la ciudadanía en participar activamente en temas de seguridad ciudadana, porque la policía nacional no se abastece, y el apoyo que requiere es fundamental, pero la importancia de que el ciudadano actúe frente a hechos delictivos, radica una importante labor pero una labor que necesariamente requiere de garantías para la persona de a pie que ejerce una acción como es el arresto ciudadano.

El compromiso del estado de defender y ayudar al ciudadano en casos de arresto ciudadano es un punto muy importante para ponerse en agenda para el parlamento; la protección de sus derechos fundamentales en las que pone en riesgo al momento de detener a un delincuente, se debe tomar acciones; muy aparte de que sea una facultad mas no una obligación es la actuación consiente del ciudadano para no querer dejar impune.

Los actores que deben participar en arresto ciudadano deben ser los mismos ciudadanos así lo dice la comisión nacional de seguridad ciudadana CONASEC; donde nos menciona a través de la ley de la SINASEC que designa claramente en las zona urbana, aunque sin presupuesto y dejando un vacío en el campo, el que viene siendo suplido por las rondas campesinas; sus avances son mínimos, por lo que se hace conveniente dejar su conducción a los profesionales del orden, la seguridad y la ley, como son los policías peruanos, por supuesto con la invalorable participación ciudadana.

Los actores que deben participar en la seguridad pública son los ciudadanos mismos, rondas campesinas, así como juntas vecinales y los serenazgos, es por ellos que el papel que cumplen las personas, en combatir con la delincuencia es necesaria y fundamental; por



tal motivo exhortamos a que estos ciudadanos así como se exponen a que sean heridos al momento de ejercer el arresto ciudadano, estos deben tener una garantía respecto a sus derechos que son arriesgados ante un delincuente, así como sus familiares que también pueden salir perjudicados por un arresto ciudadanos.

La realidad social es que en nuestro país el déficit de efectivos policiales es un problema que está latente; la inseguridad ciudadana en la que vivimos los peruanos y la falta de acceso a la justicia, donde el estado como principal responsable, porque la misma constitución lo demanda en su artículo 44 de nuestra constitución donde establece que los deberes primordiales del estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad.

Si bien es cierto el arresto ciudadano es una norma ya vigente, es correcto decir que es una figura que está bajo un plan de implementación progresiva en distintos puntos del país; esta iniciativa tiene reconocimiento internacional en otros países y por la doctrina comparada como hemos visto anteriormente.

La misma constitución establece el arresto ciudadano en el artículo 2, 24, b; respecto a la figura de la restricción a la libertad individual; es una figura excepcional y es una forma de sustituir la función del estado pero no pretende subrogar facultades a la policía nacional, porque tiene requisitos estrictos de inmediatez.

La formalidad que debe seguir el particular en el arresto para que no haya algún indicio de inconstitucionalidad, son muy pocas y factibles de realizar para que en el momento de la detención no se presenten contratiempos que hagan obstaculizar la acción de detención en flagrancia delictiva; son dos instituciones que están ligadas entre sí, una depende de la otra para la subsistencia de esta institución es por ello que estamos ante una ley muy útil para la sociedad, rechazando cualquier tipo de cuestión a la ley que regula esta figura jurídica de apoyo social y policial.

Según Muñoz (2010) “señala que la lucha por la seguridad ciudadana no debe ser librada solamente por el estado sino que corresponde a la población apoyar a sus autoridades y colaborar en la medida de sus posibilidades” (p. 77).

Es una facultad otorgada por el estado para la sociedad misma, colaborando justamente para su tranquilidad y su seguridad, el derecho lo establece y por ende se debe ejercer bajo responsabilidad y con sujeción y ciertos límites.

También según la ley de seguridad ciudadana, ley 27933 del 11 de febrero del 2003, sintetiza a la seguridad ciudadana como la acción integrada que desarrolla el estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de la vías y los espacios públicos, del mismo modo, busca contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

Lo que se puede inferir de lo que dice la ley es que exhorta de manera directa la participación del ciudadano en contribuir con la seguridad ciudadana para efectos de erradicar la delincuencia en el país; y por ende la figura de arresto ciudadano es aquel mecanismo idóneo para poder garantizar la paz, la tranquilidad y el cumplimiento de garantías individuales y sociales a nivel nacional.

En el Perú se dio el recurso de agravio constitucional de fecha 3 de agosto del 2012, interpuesto por don Cesar Leonardo Sánchez Sebastián ante el tribunal constitucional respecto a una resolución expedida por la segunda sala especializada en lo penal para procesos con reos libres de la corte superior de Justicia de Lima de fecha 22 de febrero del 2012, donde el recurrente alega haber sido arrestado injustamente por un grupo de comuneros (arresto ciudadano) violando así sus derechos al debido proceso a la tutela procesal efectiva y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, porque supuestamente se le acuso de intento de violación sexual de una menor de edad cuando se encontraba en estado de ebriedad, para lo cual el acusado arguye que esta acusación es falsa y que se realizó para otros fines contrapuestos, razón por la cual el recurrente interpone la acción de habeas corpus contra los comisarios que participaron en su detención, asimismo contra la fiscal del caso y el magistrado titular del juzgado que expide la sentencias materia de impugnación. El tribunal constitucional en su decisión final declara improcedente la demanda respecto a la actuación del fiscal emplazado, a la denuncia N° 215-2011, al atestado policial N° 042-2011-VII-DIRTEPOL-DIVITER-SUR3-CDP-DEINPOL y al mandato de detención, a la vez se declaró infundada la demanda respecto a la alegación de vulneración del derecho a la debida motivación del auto de apertura de instrucción de fecha 1 de agosto del 2011.

Por lo tanto en la presente sentencia se ha respetado todos los lineamientos en base a una detención justa, ya que el decreto legislativo N° 29372 ley de arresto ciudadano faculta a los ciudadanos a efectuar detenciones, siempre y cuando se respete los requisitos que exige la ley; es por ello que en el presente caso no se ha vulnerado ningún derecho del recurrente respecto a su detención y a la apertura de instrucción efectuada por el fiscal ameritando las pruebas ofrecidas por los policías que actuaron en el hecho y destacando la participación de los ciudadanos referente a casos de seguridad ciudadana, y que gracias a este mecanismo las diligencias se pueden hacer más efectivas y con mayor celeridad posible. Es por tales razones que los magistrados del tribunal constitucional declaran improcedente la demanda del recurrente, porque su detención fue bajo fundamentos razonables y previstos en la normativa vigente.

### **Flagrancia delictiva**

Si bien es cierto la figura de flagrancia consagrado en el art. 259 del código procesal penal y como requisito esencial para que se configure el arresto ciudadano; es necesario mencionar que diversos autores, sugieren que la detención ciudadana se dé solo en la flagrancia directa, pero en la práctica se da en los tres tipos de ya sea en flagrancia directa, cuasi flagrancia y presunción de flagrancia.

Según el tribunal constitucional en el expediente N° 2617 – 2006- PHC/TC, nos menciona sobre la flagrancia en la comisión de un delito requiere el cumplimiento de cualquiera de los requisitos siguientes:

[...]a) la inmediatez temporal, es decir que el delito se esté cometiendo o se haya cometido momentos antes; y , b) la inmediatez personal, es decir, que el pres supuesto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del delito, y este relacionado con el objeto o los instrumentos del delito (2007, p. 23-24).

A través del proyecto de ley 3685 – 2009, presentado por el ejecutivo el 19 de noviembre de 2009, se promulga el decreto legislativo 29569 del 25 de agosto del 2010, donde se modifica, se redefine y amplía los alcances de la flagrancia delictiva para efectos de la detención policial; para lo cual se incorpora un supuesto de flagrancia más, por lo tanto en el artículo 259 del código procesal penal establece que:

Habiendo incorporado como forma de captura en flagrancia a través de medios tecnológicos audiovisuales para determinar la flagrancia de un hecho tipificado como delito.

### **Falta de garantías para el ejercicio de arresto ciudadano**

Desde mi punto de vista, y después de haber analizado la normativa que regula el arresto ciudadano ya sea ejercida por el serenazgo o un particular cualquiera, se logra apreciar que no hay garantías que proteja al ciudadano de a pie que se enfrenta a un delincuente en un hecho delictivo; pues la norma no las establece de manera taxativa, es por ello que el objetivo del presente trabajo es incorporar, beneficios y garantías para el ciudadano que podría terminar perjudicado por querer obrar de buena fe y en aras de su comunidad, salvaguardando la seguridad pública y tratando de no dejar impune un hecho delictivo.

Las garantías que se pretende proponer son de índole económico, social y jurídico; pues el estado no lo determina en ninguna ley; y el ciudadano que pone en riesgo su vida, integridad y su salud no tiene ninguna garantía que salvaguarde sus derechos, eso trae como consecuencia que los particulares ante un hecho delictivo queden omisos a actuar y aprehender a un delincuente, o en su defecto si un ciudadano arresta a un delincuente, este podría terminar siendo lastimado físicamente o perdiendo su vida de manera injusta; pues la pregunta es ¿Quién costeara los gastos de su recuperación en un hospital?, ¿quién protege a sus familiares que dependían de esa persona como único sustento?; o que tipo de recompensa se le entregara al particular por su Valerosa acción de capturar a un delincuente; pues en pocas palabras hay un paquete de seguridad jurídica que el estado otorgue al ciudadano de a pie que ejerce el arresto ciudadano, pues la respuesta es no y eso es lo que se intenta proponer para que la norma de arresto ciudadano no posea algún vacío, que ponga en estado de indefensión al particular, que por una buena causa no es atendido ni apoyado por el estado.

### **Garantías de protección para el ciudadano que arresta**

“Una garantía es un medio jurídico institucional que la propia ley señala para hacer posible la vigencia de los derechos y libertades reconocidos y otorgados.”(Romero, 2004, p.34).

Las garantías como menciona el presente autor son mecanismos que posibilitan la seguridad de los derechos de la persona y que la ley debe reconocer los alcances y las posibles repercusiones a las cuales esta debe orientarse para la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo Bielsa (2002) define “la garantía como un medio para poner en movimiento a la autoridad para que restablezca el derecho subjetivo cuando este ha sido vulnerado” (p. 22).

El ciudadano que se expone debe estar provisto de garantías dadas por el estado para que pueda defenderse ante cualquier situación de peligrosidad o daño que se genere por resultado del ejercicio de arresto ciudadano y el presente trabajo se basa estrictamente en este tema y es por ello que se ha propuesto las garantías para el ciudadano.

### **Seguridad social**

El seguro social es una garantía que debe tener el ciudadano que expone su vida, integridad y su salud; pues un arresto ciudadano tiene sus riesgos y por tal motivo el estado debe proveer de beneficios y garantías que no dejen en estado de desprotección al ciudadano que defiende la seguridad de su comunidad.

La doctora Pacheco define la seguridad social:

[...] como una cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la seguridad social en salud, así como otros seguros de riesgos humanos (2006, p. 9).

La seguridad social es un beneficio que muchos no gozamos, y en el sentido de la persona que no posee un trabajo estable; la mayoría de nuestra población no cuenta con trabajo y por ende tampoco con seguro social; si en el caso que un ciudadano ejerce arresto ciudadano y acaba con daños físicos permanentes y no cuenta con seguro integral de salud; quien asiste a este ciudadanos que por su buena acción el estado, no lo protege frente a estas circunstancias que el legislador debe prever en la norma de arresto ciudadano, es por ello que la iniciativa de otorgar garantías a la persona común que ejerce arresto ciudadano,

es una propuesta que debe ser tomada en cuenta porque la misma constitución lo demanda en su artículo 1, en donde el estado debe garantizar su defensa y el respeto de su dignidad ya que es el fin supremo de la sociedad y del mismo estado, de esta manera proveer a la persona atención médica producto del arresto, y psicológica de ser el caso mediante los tratamientos que sean necesarios para su eventual recuperación, asimismo proporcionar los recursos necesarios para el costo de medicinas, implementos y alimentación que implica el tratamiento de su recuperación.

### **Seguridad económica**

La seguridad económica una garantía que se intenta proponer en este trabajo de investigación, para la persona que ejerce el arresto ciudadano; pues el caso en que una persona captura a un delincuente y de inmediato es entregado a la dependencia policial o a la autoridad más próxima, esta persona por su valiosa acción debería ser recompensado justamente por poner en riesgo su vida; o en muchos casos la persona que ejerce esta facultad termina muerto o lesionado irreversiblemente; pues el estado debería por obvias razones otorgar de ser el caso una reparación por cuanto a los daños ocasionados producto del arresto, si se tratara de un delincuente cuyos delitos sean de persecución pública y de gravedad, pues la razón es porque para el estado es más valiosa su captura; la necesidad de recompensar a estos ciudadanos es importante; pues así se estimula a la ciudadanía a contribuir con la seguridad pública y la administración de justicia. Y con respecto a la reparación es para que el ciudadano que resultase perjudicado por su acción de arrestar, pueda de esta manera cubrir los gastos que podría tener en referencia a su familia y el peligro que también los asecharía.

### **Seguridad jurídica**

Asimismo, la seguridad jurídica es lo que se intenta obtener de parte del estado por intermedio de sus instituciones representativas a través de las mismas leyes que hacen posible tal consigna y es lo que en principio se generaliza las propuestas de garantías de protección como un derecho que tiene un ciudadano para alegar seguridad jurídica estatal indudablemente.

“La seguridad jurídica establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función de los Estados de Derecho” (Pérez, 2007, p.22).

La seguridad jurídica que debe proporcionar el estado al ciudadano que pone en riesgo su vida para arrestar a un delincuente en flagrante delito invocando la figura jurídica de carácter procesal como es el arresto ciudadano; es que tenga por finalidad preservar tanto la identidad del protegido como su domicilio, profesión y el lugar donde trabaja, a efectos de lograr en él una seguridad jurídica que le permita estar protegido ante un peligro grave que puede ser dirigido tanto contra su integridad física, su libertad, sus bienes, cónyuge, conviviente, sus descendientes, ascendientes e incluso contra sus hermanos, quienes se vean amenazados reiteradas veces; donde el estado cumpla un papel importante y a través de sus instituciones representativas de dar protección jurídica, invocando la ley sin arbitrariedades. La garantía de seguridad jurídica de parte del estado es importante para no dejar que el ciudadano y o familia no se encuentre desprotegido; es por ello que es factible que se les provea garantías para con su integridad física a través de las instancias pertinentes del estado, ya que de una u otra manera el ciudadano para colaborar con su sociedad pone en riesgo su tranquilidad.

### **Unidad de víctimas y testigos UDAVIT**

Si bien es cierto en el NCPP del 2004, incorpora lo que son medidas de protección que muchas veces es para proteger a los testigos o víctimas de un delito dentro del proceso penal en sus artículos del 94 al 110, pero observando que para el ciudadano que cumple la función de arrestar a delincuentes no posee este beneficio en ningún dispositivo del mencionado cuerpo legal y su función es propiamente arrestar a delincuentes flagrantes y conducirlos a la dependencia policial y que de esta manera colabora con la administración de justicia, asimismo a nivel internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, difunde la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29.NOV.1985, comprometiendo a los Estados (entre ellos, al Perú) a considerar la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos, incluyendo el resarcimiento

y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios. Es decir la unidad de protección de víctimas y testigos incorporado a través de un Reglamento del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos aprobado Con fecha 21/12/2000, se publicó la Ley N° 27378 y que está en nuestro nuevo código procesal penal; que cumple con proteger a la víctima del delito, dándole asistencia médica, reparación, etc.; lo mismo que se quiere plasmar en este trabajo de investigación dando un proyecto que solo sea destinado a la protección de aquellas personas que al ser ciudadanos colaboran con la reducción progresiva de la delincuencia del país al no haber un gran número de efectivos policiales y ser insuficientes las políticas para combatir la inseguridad ciudadana, se toman como un medio subsidiario la de incorporar la facultad de arrestar a un delincuente de parte de un ciudadano que de manera activa contribuye con la seguridad pública. Esta unidad de protección de testigos víctimas y peritos así como servidores públicos que colaboran de una u otra manera con el proceso penal, debería también tomarse en cuenta el ciudadano que arresta e incluirlo en ese sistema como una forma de apoyar al ciudadano común que cumple un protagonismo en la seguridad ciudadana para la reducción de la criminalidad y la progresiva delincuencia que se vive en el país. Ya que su modo de actuar consiste en colaborar activamente con la policía nacional en la captura de peligrosos delincuentes así mismo no dar cabida a la delincuencia como es el caso las juntas vecinales que cumplen un rol importante en la sociedad y sobre todo en lo que el combate a la delincuencia.

Es por ello que así como se integran algunas unidades de protección para víctimas y testigos, peritos, es sede fiscal y policial también deberían integrar la protección al ciudadano que ejerce arresto ciudadano como un colaborador del proceso penal y persecutor del delito, la noción básica del problema de investigación es si es necesario la inclusión de garantías que cumplan la función de proteger.

Las medidas de protección que ampara a la víctima, testigo, perito y colaborador eficaz, están establecidos en el título V del artículo 248 del nuevo código procesal penal, y que consiste en brindar protección máxima aquellos mencionados, pero literalmente el ciudadano que arresta no se encuentra incluido para el goce de esos beneficios, que por el grado de la peligrosidad a la que se enfrenta en arrestar es totalmente fundamental para la salvaguarda de su seguridad personal y familiar, con la finalidad que la ciudadanía colabore activamente con la lucha contra la criminalidad en todas sus formas, una manera



para estimularlo y no generarle desconfianza con esta facultad, es proporcionarles mecanismos de ayuda y programas que transmitan esa desconfianza.

### **La constitucionalidad del arresto ciudadano**

El congresista Lezcano Ancieta; quien expresamente manifestó en la Sesión de Debates del Congreso: “Hay que darles facultades para detención a los dirigentes de los barrios, al Serenazgo como en efecto ahí hay otro dispositivo, pero darles un tiempo razonable, señor Presidente, para luchar contra el crimen. Y eso creo que es el objetivo de este dispositivo”. Podemos apreciar que el congresista Lescano está de acuerdo con esta ley, y encima sugiere ampliarla para darles esta facultad a otras personas que puedan realizar y ejecutar esta acción en distintos casos y otros sectores. Es por ello que se descartaría la inconstitucionalidad de dicha norma.

Por otra parte el autor Torres nos menciona:

[...] Que resulta analizar sobre la inconstitucionalidad, del arresto ciudadano en tal sentido, consideramos que esta nueva figura introducida al código procesal penal vulnera lo prescrito en la Constitución Política Del Perú 1993 en el Artículo 2º inciso 24 literal f, donde señala, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrante delito (2009, p.34).

El presente autor nos manifiesta su conclusión respecto al arresto ciudadano; donde determina que es inconstitucional por no cumplir con los requisitos establecidos por la constitución del estado; pero de esa conclusión no se puede respaldar en fundamentos de peso para dar una respuesta a la inconstitucionalidad de la norma que regula el arresto ciudadano; por lo tanto desde una perspectiva jurídica esta crítica no sería válida, para que no sea tomada en cuenta en probar su inconstitucional y que de este modo esta ley está en armonía con las leyes de carácter constitucional.

Para el doctor Bernal, señala que:

[...] Constitucionalmente, el arresto ciudadano en el Perú, no se puede dar; sólo se puede detener a una persona, si se ha cumplido alguna de las dos exigencias que pide la Constitución Política del Perú, como por mandato

judicial o por la autoridad policial, cuando sea sorprendido en flagrante delito, de lo contrario es inconstitucional ( 2012, p.56).

De acuerdo al punto de vista constitucional del autor, nos puede afirmar que el arresto ciudadano es inconstitucional por todos sus extremos por el solo hecho de que la constitución no lo establece taxativamente; es por ello que desde una interpretación literal; el arresto ciudadano sería arbitrario y posteriormente contraviene los derechos del ciudadano que sería aprehendido en flagrante; pero desde otro punto de vista en una interpretación sistemática de esta ley, sería su interpretación en armonía con todos los dispositivos de la constitución sin vulnerar ningún derecho conexo y que se actuaría de acuerdo al bien común, y otras normas que son aplicadas para el bienestar de la sociedad y del estado; por lo tanto el arresto ciudadano no vulnera ningún derecho fundamental ni la constitución política con todos sus preceptos, por ser legal y valido en todos sus extremos.

### **Los serenos municipales y su facultad de ejercer arresto ciudadano**

Los serenos municipales son aquellos servidores públicos contratados por la municipalidad de un distrito determinado, con la finalidad de cumplir una función específica con la seguridad ciudadana y con la colaboración en la lucha por la delincuencia a nivel sectorial; sus funciones son prevenir y reprimir la delincuencia, evitando la falta de protección del ciudadano frente a hechos vandálicos que mayormente se presentan en el día como en la noche.

Anteriormente el sereno debía reunir ciertos requisitos físicos para poder ostentar el cargo de sereno de su distrito; debían ser robustos, ágiles, tener una edad promedio ni tan jóvenes ni tan viejos, asimismo no contar con antecedentes penales ni policiales; para que de esta manera el personal del sereno se desempeñe correctamente a su función; con las posibilidades de su físico, y las necesidades de la población respecto a su contribución como agente de la seguridad ciudadana, en definitiva el sereno municipal cumple un papel importante y colabora con los efectivos policiales en temas de seguridad ciudadana, la vigilancia que realiza es nocturna y mucho más importante para ese horario, ya que los vándalos efectúan sus fechorías en la noche porque es más fácil y estratégico hacerlo, por tal motivo es que el agente de serenazgo a través de sus móviles se dedican a patrullar por las noches aquellas zonas donde son más frecuente los robos y los asaltos; la manera más

efectiva para trabajar en el sector seguridad ciudadana es que los agentes trabajen en equipo con los oficiales de policía; es por tal razón que un sereno siempre va acompañado con los serenos para efectuar las detenciones o reducir a los delincuentes para su posterior arresto y conducción a la comisaria.

Sin lugar a duda es importante y necesario que el sereno tuviera la facultad de ejercer arresto ciudadano, a pesar de no estar facultados por la constitución política y las normas conexas que hayan previsto tal posibilidad, se dio la iniciativa, tal como se propuso en el proyecto de ley N° 2030-2007 por el alcalde del distrito de Jesús María, Enrique Ocospoma Pella; el cual fue aprobada por el concejo municipal, y ratificada por el congreso de la república, ya que el motivo del proyecto de ley fue que el personal de serenazgo pueda intervenir de manera eficaz en el auxilio para el ciudadano ya que al no contar con una base legal que los faculte para la detención de los implicados en hechos delictivos y su inmediata conducción ante la autoridad policial, el propósito de esta propuesta es tratar de mejorar el sistema de seguridad pública y social, el estado para eso debe proveer de políticas públicas para hacer eficientemente el trabajo de las autoridades del orden.

#### **Arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla**

En el distrito de Ventanilla se presentan casos de arresto ciudadano, tal como lo muestra el siguiente cuadro estadístico de la comisaria de Ventanilla.

**CUADRO ESTADISTICO QUE CORRESPONDE AL ARRESTO CIUDADANO DURANTE EL AÑO 2016  
EN LA JURISDICCION DE LA COMISARIA VENTANILLA**

MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TOTAL DETENIDOS AÑO 2016, VARIOS	11	15	39	25	44	29	37	55	60	95	46	19	475
ARRESTO CIUDADANO	1	0	1	4	3	1	3	3	2	4	2	1	29
1 HURTO	1		1	2	1	1	1	2	2	3	2	1	17
2 HURTO AGRAVADO													0
3 ROBO													0
4 ROBO AGRAVADO													0
5 CONTRA LA SALUD PUBLICA TID													0
7 C/L/SEX. VIOLACION				1	2		1	1					5
8 C. LA VIDA CUERPO SALUD, LESIONES													0
9 C. LA VIDA CUERPO SALUD, HOMICIDIO													0
10 OTROS DELITOS				1			1			1			3
TOTAL DETENIDOS POR EL ARRESTO CIUD.	1	0	1	4	3	1	3	3	2	4	2	1	25



**Fuente:** Comisaria del Distrito de Ventanilla (área de estadística).

La Azaña de los ciudadanos Ventanillenses en ejercer arresto ciudadano desde que entró en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal del 2004 en el distrito de Ventanilla en el 2016, es muy importante, ya que los mayores índices de criminalidad, se presentan en la mayoría de los distritos del Callao, y por ello es necesario que opere este mecanismo por ser de gran ayuda para la seguridad ciudadana, independientemente de la gran estrategia de la municipalidad en reforzar la seguridad ciudadana al incorporar serenos municipales en todo el sector así como la incorporación de cámaras de vigilancia que contribuyen con la detección y prevención de delitos.

El comisario Ramírez, del área de estadística y responsable que maneja este tipo de información, y que amablemente nos proporcionó el reporte estadístico de casos de arresto ciudadano en Ventanilla que corresponde al año 2016, nos dio su manifestación respecto al tema en cuestión, nos dijo que los ciudadanos al momento de dejar a los delincuentes en la comisaria, al finalizar la diligencia se retiran sin recibir una garantía que lo proteja de cualquier acontecimiento futuro a causa de detener a un delincuente renqueado o peligroso, y que muchas veces estas personas no contribuyen en los actos de investigación para poder procesar a estos delincuentes por temor y miedo a que sean víctimas de represalias; los comisarios no saben la suerte de estos ciudadanos y muchas veces no colaboran con rendir su manifestación y tratan de escapar para que el delincuente no lo reconozca a la

perfección, no en pocos casos las personas que colaboran con la detención de delincuentes es una ayuda muy útil manifiesta el comisario; además sugiere que sean retribuidos y recompensados y que permita que este ciudadano se estimule a seguir colaborando con la justicia y seguridad pública del país, porque el policía no puede estar en todos lados a veces tiene que atender otras diligencias y en ese ínterin ocurren muchos delitos es lo que manifestó el comisario de la PNP Ventanilla.

El ciudadano está en riesgo de ser lesionado sin lugar a duda y es necesario que el estado provea de ayuda a esta gente que merece un reconocimiento y apoyo para su consecuente colaboración en combatir con la inseguridad ciudadana a nivel nacional, es necesario que cuentes con garantías que protejan su integridad ante cualquier peligro porque de ese modo seguirá colaborando activamente con la seguridad pública que es una tarea de todos.

#### **1.4. Formulación del problema**

El problema a investigar, viene a ser aquella incertidumbre, que de algún modo pretenda resolver, respecto a un hecho o fenómeno que aqueja; siendo en este presente caso el problema de estudio a investigar, es la falta de garantías de protección que nuestra normativa no establece para el ciudadano que ejerce arresto ciudadano, dada la peligrosidad de su accionar frente a delitos flagrantes. Pudiendo también conceptualizarlo, como aquella interrogante que busca la obtención de una reciente información respecto a un tema objeto de análisis.

“El problema no es algo disfuncional, molesto o negativo, es aquello que incita a ser conocido, teniendo en cuenta que su solución sea eficaz, es decir, la respuesta resulte práctico o teórico”. (Bernal, 2002 p. 88).

“El problema de investigación es el hecho más importante de la tarea del investigador porque implica una serie de decisiones previas de la mayor importancia, que generalmente se realizan de manera implícita y no siempre de manera realmente consciente por parte de aquel” (Chacón, 2012, p.58).

#### **Problema General:**

¿De qué manera, la falta de garantías de protección en la Ley N°29372 afecta a la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla - 2016?

### **Problemas específicos:**

- 1) ¿De qué manera la Ley N°29372 protege a la persona que ejerce arresto ciudadano?
- 2) ¿De qué forma se podría incorporar a la Ley N°29372 un catálogo de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano?
- 3) ¿Qué tipo de garantías de protección se deben incorporar en la Ley N°29372, para proteger a la persona que ejerce arresto ciudadano?

### **Justificación del estudio**

“La justificación del estudio es el primer paso en la realización de una investigación. Consiste esta elección en determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a presentar. La elección del tema corresponde necesariamente al investigador” (Behar, 2008, p.28).

Martínez y Céspedes (2006), sostienen “Es el conjunto de argumentos necesarios para fundamentar, sustentar y defender la realización de trabajo de investigación” (p. 46).

Asimismo, Vara (2010), señala que la “toda investigación tiene algún impacto en la sociedad. Por eso, en esta parte de la investigación, debes identificar cual será el impacto o beneficio de tu investigación.

### **Justificación práctica**

En relación a la justificación práctica, la presente investigación adquiere su justificación en la necesidad de determinar con claridad el arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla y en el Perú, y de verificar si la misma cumple con proteger el derecho común de la seguridad ciudadana al igual que del ciudadano de a pie que realiza esta acción. Lo cual permitirá esclarecer la situación actual que tienen los ciudadanos frente a esta posibilidad que les otorga la ley y de qué forma la misma ley les garantiza protección frente a un posible perjuicio en consecuencia de la detención que por lo general es peligrosa y delicada.

Con ello, se podrá mejorar los criterios a considerar al momento de que se realice un arresto a un delincuente por un ciudadano que quiere colaborar con la justicia, y también determinar cuáles son los aportes para efectivizar y hacer perfectible la norma de acuerdo a algunos puntos débiles que se puedan presenciar durante la elaboración del trabajo.

### **Justificación teórica**

El tema del arresto ciudadano es un tema muy delicado en muchos aspectos, la manera en que un ciudadano debe enfrentar esta labor es de forma responsable para no ocasionar excesos, y no termine perjudicando otros derechos o perjudicado personalmente. El estado en aras de proteger el bien común nos provee de ciertas normas para efectos de conseguir una solución al problema social que nos afecta a todos los ciudadanos como es la inseguridad ciudadana; hay algunas oposiciones frente este mecanismo, pero la idea es armonizar estas opciones con la sociedad en su conjunto para que no haya alguna disconformidad.

Es por ello, que la presente investigación se justifica en razón de que existe la necesidad de precisar de qué manera la legislación peruana protege el derecho fundamental a la seguridad ciudadana con el mecanismo del arresto ciudadano, y como esta ley debe proteger a los ciudadanos que ejercen el arresto respecto a delincuentes; cuan protegidos están frente a una situación de riesgo, esa es la idea del trabajo dando hincapié de que beneficios tendrá el ciudadano de a pie por su noble colaboración con las autoridades del orden, en un hecho delictivo.

### **1.5. Justificación metodológica**

La metodología que ha de emplearse en el presente estudio se basa en nuevas estrategias para generar y analizar los conocimientos de la materia objeto de investigación, las cuales comprenderán el análisis de libros y autores especialistas en el tema (doctrina), entrevistas a personas que habitan los lugares más peligrosos para saber si están satisfechos con las normas que el estado nos da para combatir estos problemas y cuan útil es para la sociedad, asimismo abogados especialistas en temas derecho penal y procesal penal.

También se emplearan análisis del marco normativo peruano, Asimismo, se empleará el uso de instrumentos como encuestas, guías de entrevistas, con el fin de recaudar mayor información.

## **1.6. Hipótesis jurídico**

Para Sampieri:

[...] Las hipótesis y los supuestos son afirmaciones conjeturables a proposiciones empíricas que se relacionan conceptos, en el enfoque cualitativo los supuestos son posibles respuestas o tentativas a las preguntas de investigación, para probar si son ciertas o no en un contexto específico. (2010, p. 124)

### **Hipótesis general:**

La falta de garantías de protección en la ley N°29372 Ley que regula el arresto ciudadano, afecta sin lugar a duda a la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla por la entrada en vigencia del NCPP en ese distrito judicial en el año 2016; afectaría sus derechos constitucionales como la vida, el cuerpo y la salud, asimismo la de sus familiares, además se presentaría una obstaculización de la administración de justicia por no haber una colaboración en los actos de investigación por temor de parte del ciudadano que arresta por la falta de garantías.

### **Hipótesis específicos:**

1. En los casos de arresto ciudadano, según algunos casos en concreto no se ha presenciado alguna ayuda ya sea de índole económico, social o jurídico que ofrezca de forma expresa la ley N°29372, esto debido a que existe un vacío al no establecer estándares y parámetros para ejercer esta potestad, así como tampoco mecanismos de protección eficaces.
2. Para que se pueda incorporar un catálogo de garantías de protección, básicamente se debería promulgar un reglamento de la ley N°29372, a través de otra ley o un



decreto supremo, es decir se debería legislar este instituto procesal para darle mayor elasticidad y eficacia.

3. Las garantías que se deben incorporar es de acuerdo a la necesidad del ciudadano y a la magnitud del daño y riesgo de sus bienes jurídicos que se expone al ejercer un arresto, esto es, su integridad física, su salud y su vida; por lo que no es dable dejar en estado de indefensión a la persona o ciudadano que contribuye con la lucha contra la delincuencia.

### **1.7. Objetivos**

Según Chacón (2010), el “investigador mediante los objetivos precisa los propósitos, fines y metas de su estudio, debe saber a dónde quiere llegar, que es lo que pretende mostrar, falsear, verificar, invalidar o contrastar” (p.63).

#### **Objetivo General:**

Determinar de qué manera la falta de garantías de protección en la Ley N°29372 afecta a la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla – 2016.

#### **Objetivo Específicos:**

1. Determinar de qué manera le Ley N°29372 protege a la persona que ejerce arresto ciudadano.
2. Analizar de qué forma se podría incorporar a la Ley N°29372 un catálogo de garantías de protección a la persona que ejerce arresto ciudadano.
3. Determinar qué tipo de garantías de protección se deben incorporar en la Ley N°29372 para la persona que ejerce arresto ciudadano.



## **II. MÉTODO**

## **Metodología**

El presente trabajo de investigación contiene un **enfoque cualitativo**, por lo tanto se analizaron datos doctrinarios, la legislación peruana y extranjera referente al tema de investigación.

En este sentido se han analizado elementos teóricos y conceptuales desde un enfoque del Derecho penal y procesal penal.

Asimismo, se considera a la investigación cualitativa en un sentido amplio como, aquella “que produce datos descriptivos por medio de las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (Gómez, 2006, p. 68). Premisa que se asemeja al desarrollo del presente trabajo de investigación.

### **2.1. Diseño de Investigación.**

#### **De acuerdo al enfoque de estudio**

En el presente trabajo de investigación se hará uso de la investigación cualitativa haciendo uso del método analítico hermenéutico el cual nos permitirá conocer más el objeto de estudio, es decir las diversas perspectivas generadas en el ámbito jurídico en relación con la incorporación de medidas de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano.

Asimismo, el tipo de estudio realizado en el presente trabajo de investigación es sustantiva, pues se define como aquella actividad orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos, nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato (Gómez, 2006, p. 18).

A su vez, el tipo de estudio será descriptivo porque describirá las características de cada una de las variables tal y como se presentan en la investigación no experimental.

Por lo tanto, esta investigación ha buscado observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos, partiendo de conocimientos proporcionados por conocedores del derecho observando de forma clara las diversas variables y sus relaciones dentro del contexto jurídico.

## **De acuerdo al fin que persigue**

El tipo de investigación es Teoría Fundamentada conveniente para este tipo de investigación, ya que, “permite formular una teoría que se encuentra subyacente en la información obtenida en el campo empírico. Emplea técnicas de investigación cualitativa como: la observación, las entrevistas a profundidad, la implementación de memos, entre otras” (Hernández, 2010, p. 201).

### **2.2. Diseño de Investigación**

El presente trabajo se desarrolla en un diseño no experimental descriptivo, por el cual mediremos las diversas posturas jurídicas en relación con la afectación que ocasiona la falta de garantías para la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla en el año 2016, pues partiremos de conocimientos proporcionados por juristas teniendo un enfoque retrospectivo de sus diversas categorías y sus relaciones dentro del contexto jurídico.

Asimismo, el presente trabajo de investigación se cataloga por ser una investigación de diseño no experimental bajo el criterio de un corte de investigación transaccional o transversal pues como establece Hernández (2010), “esta se implementa sobre la base de una recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único. Teniendo como propósito fundamental describir variables y analizar su interrelación en un momento dado” (p. 151).

### **2.3. Escenario de estudio**

“Es la localidad de un conjunto de elementos, seres u objetos que se desea investigar y de la cual se estudiara una fracción y que se espera que reúna características y en igual proporción” (Martínez, 2008, p.111).

El escenario de estudio se desarrolló en la ciudad de Ventanilla – Perú.

### **2.4. Caracterización de sujetos**

Los sujetos que colaboraron en el desarrollo de la presente investigación y a quienes se les realizó las respectivas entrevistas son:

- a) Operadores del derecho penal, como fiscales penales y jueces del ámbito penal, ya que ellos forman parte de los casos que tienen relación a la figura de arresto ciudadano.
- b) Abogados y docentes especializados en derecho penal y procesal penal.
- c) Ciudadanos en el instrumento de encuesta se encuestara a 10 diez ciudadanos del distrito de Ventanilla.

<b>LISTADO DE ENTREVISTADOS</b>		
<b>1.</b>	<b>RICARDO, SALVATIERRA YI</b>	Abogado de profesión, especialista y magister en derecho penal y procesal penal, trabaja como docente a tiempo completo en la Universidad Cesar Vallejo y se desempeñó como fiscal provincial en la provincia de santa.
<b>2.</b>	<b>ROBERTO CARLOS MOYA CUBA</b>	Abogado por la Universidad inca Garcilaso de la Vega. Maestría en Ciencias Políticas, mención en Políticas Publicas y sociedad de la información. Se desempeña como fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial penal del Callao, con ocho años de trayectoria en función fiscal en provincia.
<b>3.</b>	<b>GUNTHER, CORNEJO GONZALES</b>	Abogado por la universidad PUCP. Magister en derecho por la PUCP. Realizo su doctorado en derecho por la universidad católica del Perú, actualmente se desempeña como fiscal adjunto anticorrupción en Lima.
<b>4.</b>	<b>MILAGROS I. GUTIERREZ GUZMAN.</b>	Actualmente se desempeña como asistente de función fiscal en la fiscalía superior penal, de la fiscalía del Callao, con título en derecho y ciencias políticas de la universidad nacional mayor de San Marcos.
<b>5.</b>	<b>VICTOR HUGO MONTELLANOS PALOMINO</b>	Con título en derecho de la universidad Federico Villareal, actualmente se desempeña como asistente de función fiscal en la 2 fiscalía antidrogas de la fiscalía del Callao.

6.	<b>HENRY VILLANUEVA</b>	Abogado con título en la universidad inca Garcilaso de la Vega, y como asistente de función fiscal en la fiscalía superior del distrito fiscal Callao.
----	-----------------------------	--

**Fuente:** Elaboración propia

## **2.5. Población y Muestra**

### **Población**

Para Hernández (2010), la “población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174).

Para el caso de las entrevistas la población la constituyen un grupo de abogados litigantes, asistente y fiscales, especialistas y conocedores del derecho penal, asimismo la colaboración de pobladores del distrito de Ventanilla para el instrumento de encuesta.

### **Muestra**

La conforman los abogados socios del Estudio Jurídico Calagua y Asociados, asistente y Fiscales adjuntos provinciales de la 1° Fiscalía Provincial Penal, fiscalía Antidrogas del Callao, 1° Fiscalía Superior Penal, y 1° Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima; y para la encuesta ciudadanos del distrito de Ventanilla.

## **2.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad**

Ñaupas (2013), sostiene “Es que los instrumentos son las herramientas conceptuales o materiales que sirven a las técnicas de investigación, especialmente a las técnicas de recolección de datos” (p. 124).

### **Entrevista**

La entrevista en toda investigación son recursos que son mayormente utilizados con el objetivo de recolectar diversos datos e informaciones en torno al tema de estudio, que nos permitirá validar nuestra investigación.

Asimismo, Pérez (2012), define la entrevista como “una conversación intencionada, en la entrevista de dos o más personas que entran a formar parte de una situación de

conversación formal, orientada hacia unos objetos precisos. La entrevista cumple distintas funciones: Diagnóstica, investigadora, orientadora y terapéutica” (p. 38).

Por lo tanto, se puede establecer que el recurso más relevante en este método de investigación es la pregunta, las mismas que deben estar dirigidas a dar respuesta al problema de investigación, debiendo las mismas estar dirigidas con claridad, precisión y no direccionando la respuesta del entrevistado.

### **Encuesta**

Esta técnica de recolección de datos, está conformada por preguntas cerradas dirigidas a los encuestados, todas ellas con el fin de determinar su opinión.

### **Análisis Documental**

Está caracterizada por las fases de análisis formal y análisis interno de los documentos que sustentan la presente investigación, mediante ella distinguiremos la descripción bibliográfica y la catalogación, ubicación del documento dentro de una colección determinada y ordenar la información de forma sistemática.

Esta técnica se da en función del análisis doctrinario y teórico del contenido de diversos textos legales, los cuales han sido leídos y revisados en cuanto al tema en cuestión.

### **Instrumentos de recolección y análisis de datos**

Para la recolección de datos de la presente investigación se ha empleado los siguientes instrumentos de recolección de datos: la guía de entrevistas, el cuestionario y el análisis de fuente documental.

### **Validación y confiabilidad**

#### **Validación**

Para Hernández (2010), la “validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201).

#### **Confiabilidad**



Para Hernández (2010), la “confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200).

La validación de los instrumentos ha estado a cargo de juicio de los expertos.

	<b>Validador</b>	<b>Nivel académico</b>
<b>1</b>	Cesar A. Israel Ballena	Magister
<b>2</b>	Castro Rodríguez Lilian Lesly	Magister
<b>3</b>	Gamarra Ramón José Carlos	Magister

**Fuente:** Elaboración propia

## **2.7. Métodos de análisis de datos**

En el contexto del desarrollo referido al análisis de la población y la muestra se tendrá como procedimientos metodológicos de investigación: Métodos Estadísticos.

La forma de tratamiento de datos, se centró en la recolección de resultados de las encuestas y entrevistas.

### **Método Inductivo**

Es el método por el cual, a partir de varios casos observados, se obtiene una ley general, válida también para los casos no observados, se obtiene una ley general, válida también para los casos no observados, se obtiene una ley general.

**La inducción completa**, a la que se refiere Aristóteles y la llama silogismo inductivo, pretendería obtener una ley a partir de la observación de todos los casos particulares, al intentar enumerar todos los casos referidos a un aspecto determinado no es, propiamente, inducción y no tiene valor para la ciencia.

**La inducción incompleta**, es la inducción propiamente dicha, se llama inducción científica porque permite progresar en el conocimiento. Consiste en sacar, de un número relativamente corto de casos observados, una conclusión que se juzga válida para todos los casos semejantes.

## **Método Deductivo**

Es un proceso analítico sintético que presentan conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o se examina casos particulares sobre la base de afirmaciones generales ya presentadas. Este análisis lo realizaremos en el derecho comparado, toda vez que este tema se encuentra regulado en otros ordenamientos jurídicos.

### **2.8. Tratamiento de la información**

Se realizará mediante categorías es así que, para Rodríguez, las categorías se desarrollan sobre lo siguiente:

[...] Admitirán enfoques muy variados o diversos. Es desde esa perspectiva que las categorías pueden ser distintas en cuanto que unas se encuentren incluidas en otras de una amplitud superior por lo que la dirección de la clasificación debe estar direccionada a los fines que persigue teniendo lógicamente que el punto de vista de la clasificación deberá ser relevante a los fines perseguidos. (2011. p. 86).

## **Unidades Temáticas**

Los conceptos referenciales para poder organizar los resultados mediante el análisis de fuente documental, encuestas y entrevistas, los mismos que se acordes a los objetivos planteados.

- a. Garantías de protección
- b. Arresto ciudadano
- c. Persona
- d. Distrito de Ventanilla

## **Categorización**

La categorización de las unidades temáticas anteriormente mencionadas fue de la siguiente manera:

- a. El ciudadano común
- b. Facultad de arrestar
- c. seguridad

d. Requisito esencial

## **2.9. Aspectos Éticos**

El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurado bajo parámetros preestablecidos, al igual como exige el método de elaboración; asimismo de la línea de estudio, se respetó mucho la citación de algunos autores que se consultaron para la realización del trabajo de investigación es decir se respetó el derecho de autor; la iniciativa que entraña este trabajo es resultado del criterio del estudiante a efectos de mejorar en su calidad de investigador. En ese sentido el presente trabajo se basó en la credibilidad y la autonomía del estudiante que busca respaldarse en lineamientos ya establecidos.

### **III. RESULTADOS**

En el presente capítulo se organizará y describirá, los resultados de los datos acopiados, los mismos que fueron obtenidos a través de los siguientes instrumentos de recolección de datos; Guía de entrevista, cuestionario, análisis documental; dicha organización y descripción se realizará teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación.

### **I Instrumento - Guía de entrevista**

Los resultados obtenidos de las entrevistas respecto del **objetivo General: Determinar de qué manera la falta de garantías de protección en la Ley N°29372 afecta a la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla – 2016**, son los siguientes:

#### **Respecto a la primera pregunta:**

¿Usted considera que es necesario incorporar garantías de protección en la Ley N°29372 para garantizar protección a la persona que ejerce arresto ciudadano? ¿Por qué?

Al respecto, Montellanos y Gutiérrez (2017) señalan en que están de acuerdo con la incorporación de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano, debido a que siempre va haber una eventual represalia o reacción de parte del arrestado hacia el interventor, para lo cual las garantías de protección servirían como una forma de coadyuvar con la lucha contra la criminalidad en todas sus formas.

Asimismo Cornejo (2017) está totalmente de acuerdo pero bajo una apreciación distinta, al señalar que es necesario que el ciudadano que arresta debe estar provisto de todas las garantías de protección con posterioridad al arresto, ya que sería para salvaguardar su integridad física propia y que por temor es que muchas veces quedan omisos al colaborar con la seguridad ciudadana y la policía.

Por otro lado Salvatierra (2017) señala que le parece correcto que se legisle esta iniciativa porque la figura de arresto ciudadano ya existía en la práctica y por lo mismo a cualquiera que encuentre en flagrancia delictiva debe proceder a su arresto, pero asimismo el ciudadano se le debe garantizar la integridad física y moral, porque no en pocos casos el ciudadano es amenazado por el imputado o sus parientes y por lo mismo se le debe apoyar plenamente con su protección.

Sin embargo, Moya (2017) nos dice al respecto que para la incorporación de garantías para el ciudadano que arresta eso depende del caso en concreto, y se tendrá que analizar el grado de amenaza, al momento de que una persona arresta a otra por delito flagrante, asimismo por el lado en que el sujeto activo siempre va oponer resistencia para no ser arrestado y de cierta manera su aprehensión constituye una amenaza contra su cuerpo y su propia vida para el ciudadano que arresta.

Por otro lado Villanueva (2017) señala que si debería incorporar las garantías de protección para el ciudadano que arresta bajo el argumento de no poner en riesgo su integridad física, asimismo propone incorporar esta figura a la unidad de víctimas y testigos, de ser el caso, de esta manera originarle una identidad ficticia a fin de no ser sujeto de represalias por parte del imputado, es decir crear el programa para la protección de ciudadanos que arrestan.

De otro lado los entrevistados respecto del **objetivo específico 1: Determinar de qué manera le Ley N°29372 protege a la persona que ejercer arresto ciudadano**, han manifestado lo siguiente:

**Respecto a la segunda pregunta:**

¿Cree usted que la Ley N°29372 protege al ciudadano común que resulta perjudicado o lesionado por ejercer arresto ciudadano? ¿Porque?

Montellano (2017) al respecto refiere que no considera que el estado proteja correctamente a la persona que ejerce arresto ciudadano, porque a ello se debe la falta de voluntad política del gobierno en invertir en la lucha contra el flagelo de la criminalidad (debiéndose entender que esta debe ser una política del estado y no del gobierno de turno).

Asimismo Gutiérrez (2017) señala que meridianamente, porque el imputado se aprovecha del estado penal garantista que existe a su favor y como consecuencia de ello se presenta un desdén al amparo de la contraparte; sin embargo, existe también programas como (UDAVIT) que procura de algún modo proteger a la población pese a ser insuficiente y desconocido para el sector vulnerado.

Por otra parte Salvatierra (2017) considera que el estado no protege debidamente al ciudadano que arresta, porque menciona que existe un sistema, pero casi es letra muerta, y

recalca que no solo debe legislarse sino también implementarse en relación al ciudadano que arresta.

Por otro lado Cornejo y Moya (2017) señalan que no existe algún pronunciamiento, reglamento, norma o mecanismo de control idóneo que proteja debidamente a la persona que arresta, aunque manifiesta que existe un sistema de protección de víctimas y testigos, pero que no propiamente protege al ciudadano que cumple la función de arrestar, por lo mismo que se estaría ante un vacío respecto al riesgo que pueden sufrir estas personas y que sería recomendable incluir a los ciudadanos que arrestan a esos programas de ser el caso.

Pero sin embargo para Villanueva manifiesta decir que sí, porque es factible incluir a los ciudadanos dentro del programa de víctimas y testigos, unidades a cargo de las fiscalías, y por ende si hay una protección a los ciudadanos de parte del estado según el entrevistado.

#### **Respecto a la tercera pregunta:**

¿Usted cree que debería existir un sistema de protección que brinde el estado para la persona que ejerce arresto ciudadano ante eventuales amenazas y perjuicios de alguna índole? ¿Porque?

Respecto Montellanos y Gutiérrez (2017) infieren que si debería haber un sistema que proteja al ciudadano que arresta, ya que sería un óptimo mecanismo frontal contra la delincuencia, y de esta manera el ciudadano participe de manera activa con la seguridad ciudadana, recalcando que existe un sistema, pero que solo protege a víctimas y testigos pero no al ciudadano que arresta.

Por otro lado Cornejo (2017) señala que si debería existir un sistema a través de diversas instituciones representativas del estado en que protejan debidamente al ciudadano, ya que como ha indicado el ciudadano que ejerce el arresto está expuesto a que afecten su integridad física, su vida y su tranquilidad con posterioridad a su intervención.

De otra manera Salvatierra (2017) considera que se debería incorporar una institución del estado, que brinde la ayuda necesaria al ciudadano que siendo colaborador con la administración de justicia, sale perjudicado inminentemente por la implicancia de arrestar a un delincuente en flagrancia delictiva y que de una u otra manera podría ser considerada como prueba anticipada.

Según Moya y Villanueva (2017) manifiestan que sí debería haber un sistema de protección para el ciudadano que arresta de parte del estado, para que de esta manera se frene la delincuencia, para que prospere una investigación justa y que ya no exista la impunidad en el país, dando las herramientas necesarias para combatirla en todos sus extremos.

Los entrevistados respecto del **objetivo específico 2: Analizar de qué forma se podría incorporar a la Ley N°29372 un catálogo de garantías de protección a la persona que ejerce arresto ciudadano**, han manifestado:

**Respecto a la cuarta pregunta:**

¿De qué manera cree usted que se deberían incorporar garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano? explique

Asimismo Montellanos y Gutiérrez (2017) sostienen al respecto que para incorporar garantías de protección al ciudadano que cumple la función de arrestar, sería mediante la dación de decretos legislativos y con su reglamento que regule dicho extremo donde puedan crear unidades con dicho fin, tomando referencia al sistema de protección de víctimas y testigos que ofrece el NCPP del 2004.

De igual manera Salvatierra y Moya (2017) opina que para incorporar la iniciativa de garantías de protección sería a través de un solo cuerpo legislativo que regule el sistema de protección de testigos y víctimas, pero a eso se agregaría la protección de los ciudadanos que arrestan.

Sin embargo para Villanueva (2017) señala que efectivamente debería reglamentarse la ley que regula la figura procesal de arresto ciudadano para mayor efectividad en su ejercicio en la práctica.

**Respecto a la quinta pregunta:**

¿Considera usted que se debería incorporar la iniciativa de garantías de protección para el ejercicio de arresto ciudadano, a través de un reglamento de la ley 29372 (ley que regula el arresto ciudadano)? ¿Por qué?



Montellanos (2017) señala al respecto que si estaría de acuerdo y que podría ser una alternativa muy apropiada, pero a su opinión personal aconsejaría darlo a través de una ley aparte y su reglamento en aras del principio de especialidad de la norma.

A su parecer Gutiérrez y Gunther (2017) considera que si debería darse la incorporación de las garantías de protección a través de un reglamento para salvaguardar del ciudadano interviniente, para que de esta manera se vea como resultado la imitación de ejercer arresto y colaborar con la administración de justicia, por encontrarse protegidos y amparados ante garantías en su favor, de esta manera la misma norma que regula el arresto sería más entendible y aplicada adecuadamente sin que existan contradicciones e incongruencias en su aplicación.

Pero para Salvatierra (2017) considera que no sería necesario y que más bien la norma que regula el sistema de protección de testigos o agraviados deba incorporar la protección a los ciudadanos que arrestan para un eventual protección a su integridad física y moral de acuerdo a la creación de programas destinados a proteger al ciudadano que arresta así como a su familia.

Mientras tanto para Moya y Villanueva (2017), consideran que efectivamente sí se debería incorporar esta iniciativa a través de un reglamento para complementarse la normativa en ese sentido, con el propósito de que la población conozca la figura de arresto ciudadano, la flagrancia y sus presupuesto, imitando la el sistema que ya existe como el de víctimas y testigos.

Los entrevistados respecto del **objetivo específico 3: Determinar qué tipo de garantías de protección se deben incorporar en la Ley 29372 para la persona que ejerce arresto ciudadano**, han manifestado lo siguiente:

#### **Respecto a la sexta pregunta:**

Para las “garantías de protección” en una futura legislación reglamentaria de la Ley 29372, ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta respecto a la persona que ejerce arresto ciudadano?

Según Montellanos y Gutiérrez (2017), manifiestan que para una futura legislación reglamentaria de la ley 29372 en cuanto a las garantías de protección, deberían tomarse en

cuenta la protección de la identidad del ciudadano ante eventuales amenazas, cambio de domicilio, seguridad policial del interviniente y/o familiares, ocultamiento de su patrimonio y/o negocios, resguardo policial, etc., para darle mayor seguridad a sus bienes jurídicos.

Para Gunther (2017) señala que lo que se debería tomar en cuenta para las garantías de protección es reservar la identidad de quien ejerza arresto ciudadano, y que el programa de víctimas y testigos sea más eficiente de acuerdo a la protección de ciudadanos que arrestan y una forma de incluirlos a este programa y posean estos beneficios.

Asimismo para Moya (2017) nos dice que los aspectos estarían en función del grado de la amenaza en concreto, analizando a la persona que ejerce el arresto y la peligrosidad del sujeto activo y los daños que podría ser objeto el ciudadano que ejerce arresto ciudadano.

Pero sin embargo para Villanueva (2017) señala que los aspectos que se deberían tomarse en cuenta sería asistencia legal, social y psicológica, en el proceso penal, asimismo otorgarle un código a fin de ocultar su identidad, para protegerlo de diversas represalias.

### **Respecto a la séptima pregunta:**

¿Qué tipo de perjuicios podría sufrir la persona que ejerce arresto ciudadano? explique

Para montellanos, Gunther y Gutiérrez (2017), consideran los perjuicios que podría sufrir la persona que ejerce arresto ciudadano serían, la agresión o violencia física hacia el ciudadano y su familia, amenazas contra su vida, patrimonio y su familia, extorsiones, de esta manera se resalta la importancia de incorporar urgentemente garantías para la persona que ejerce arresto ciudadano.

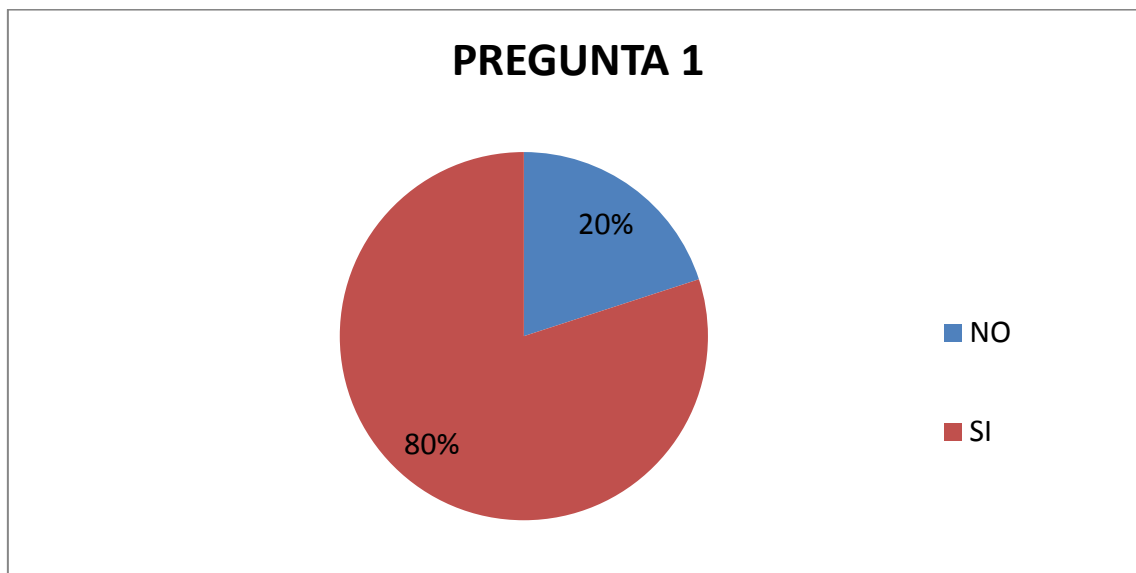
Para Moya y Villanueva (2017) señala que los perjuicios que podría sufrir una persona que arresta son un abanico de posibilidades que tiene los delincuentes para hacer daño, porque sin lugar a duda los amenazan contra su integridad física y psicológica o ser víctima de reglaje contra él y su familia para conseguir lo que es la venganza que es el principal móvil en estos casos.

## **II Instrumento – Encuesta**

### **Respecto a la primera pregunta:**

¿Usted como ciudadano Ventanillense, considera que es necesario legislar la incorporación de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano?

El 80% de mis encuestados ha señalado que si debería incorporar garantías de protección a la persona que ejerce arresto ciudadano, mientras tanto el 10% considera que no es necesario.

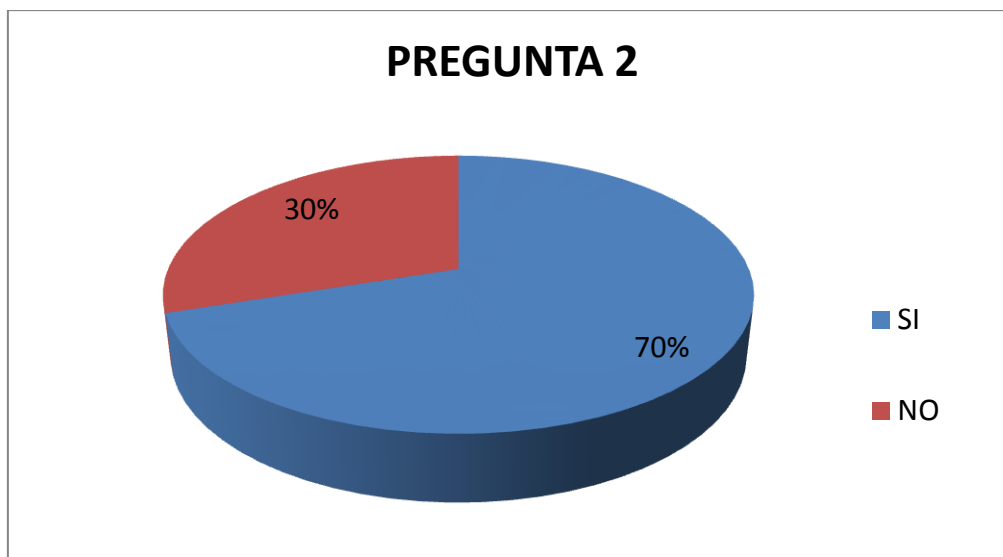


**Fuente:** Elaboración propia

#### **Respecto a la segunda pregunta:**

¿Cree usted que, regulando la iniciativa de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano de algún modo se puede prevenir los riesgos que implican esta facultad?

El 70% de los encuestados manifiesta que si se puede prevenir los riesgos del arresto ciudadano al regular la iniciativa de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano, por otro lado el 30% considera que no.

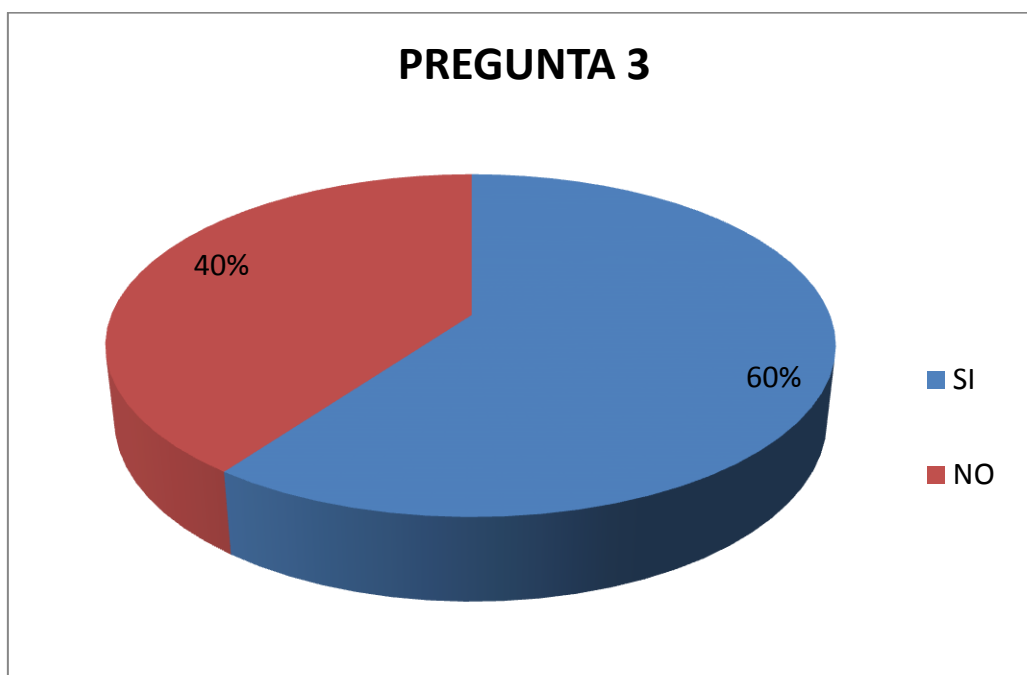


**Fuente:** Elaboración propia.

#### **Respecto a la tercera pregunta:**

¿Considera usted necesario mantener firme esta iniciativa para garantizar protección al ciudadano que arresta, así como protección a sus familiares?

El 60% de los encuestados considera mantener firme esta propuesta de las garantías de protección la persona que arresta así como sus familiares, mientras que el 40% considera que no es necesario.

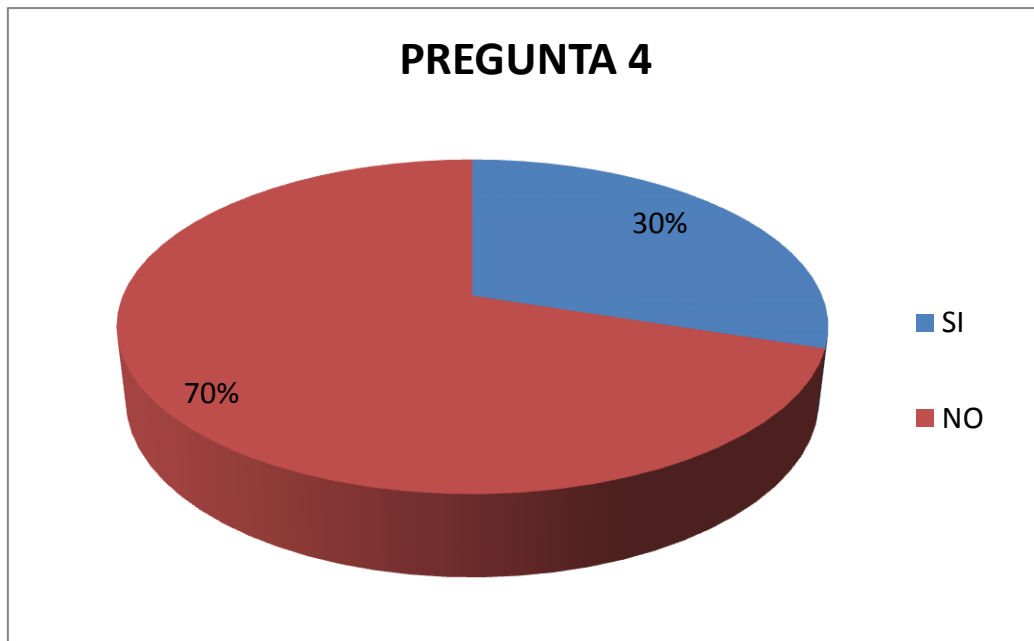


**Fuente:** Elaboración propia.

#### **Respecto a la cuarta pregunta:**

¿Cree usted, que el Estado ayuda suficientemente a las personas que resultan perjudicados por ejercer arresto ciudadano?

El 30% de la población encuestada considera que el estado si ayuda a la persona que ejerce arresto ciudadano, por otro lado el 60% considera otra opinión al manifestar que no.

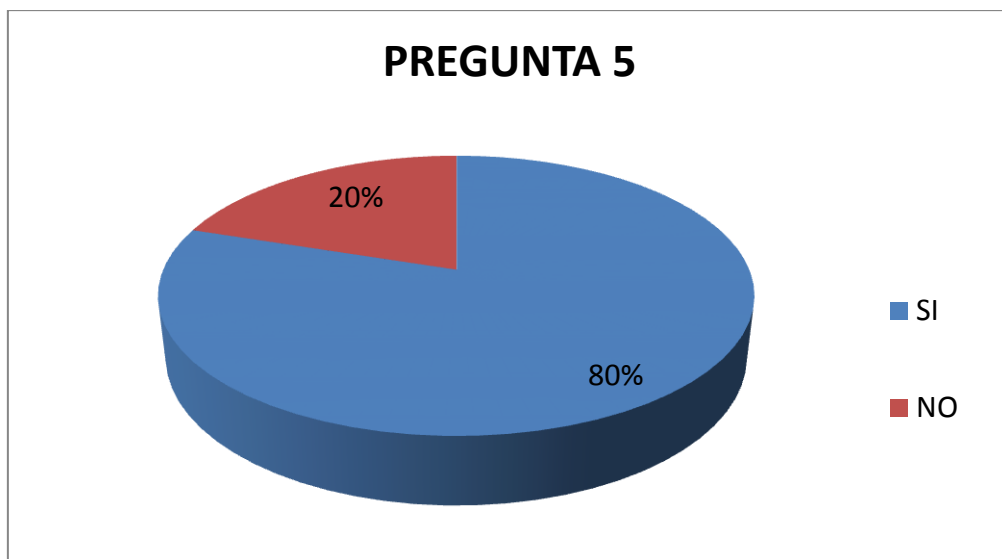


**Fuente:** Elaboración propia.

#### **Respecto a la quinta pregunta:**

Considera apropiado que el Estado incorpore un sistema de protección para el ciudadano que arresta?

El 80% de los encuestados considera que si es apropiado que el estado incorpore un sistema de protección para el ciudadano que arresta, mientras que el 20% manifiesta que no.

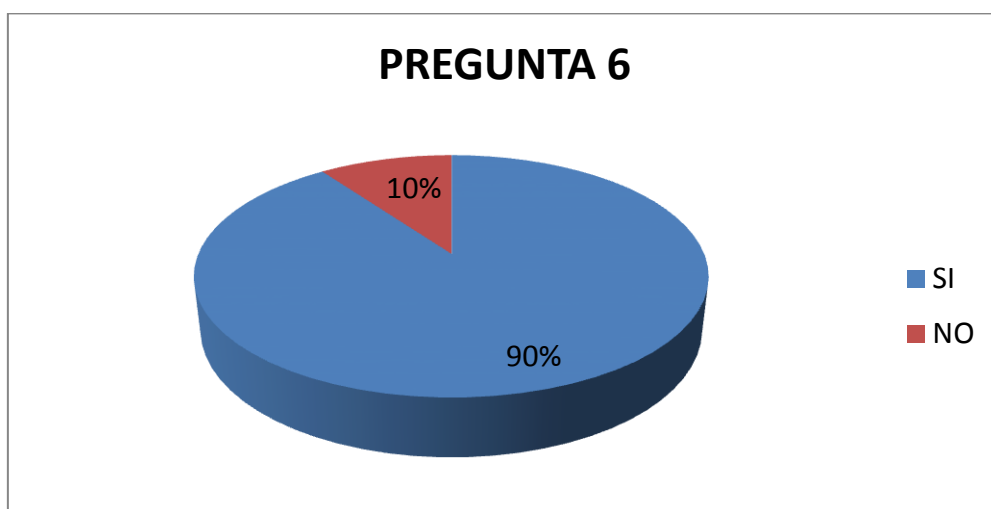


**Fuente:** Elaboración propia.

#### **Respecto a la sexta pregunta:**

¿Cree usted que el estado al no integrar las garantías de protección para el ciudadano que arresta, comete una grave afectación a su seguridad física y moral?

El 90% de los encuestados manifiesta que el estado comete una grave afectación a su seguridad física y moral de la persona que arresta al no incorporar garantías de protección, mientras que el 10% considera que no.

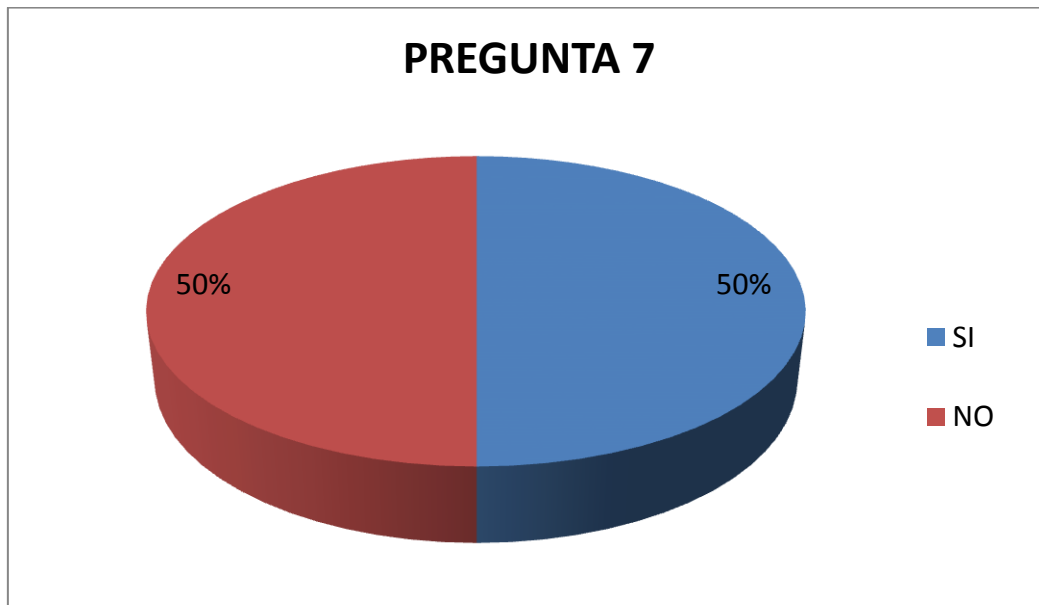


**Fuente:** Elaboración propia

#### **Respecto a la séptima pregunta:**

¿Cree usted, que para incorporar garantías de protección al ciudadano que arresta, se debería reglamentar el decreto legislativo N°29372 (Ley de arresto ciudadano)?

El 50% de la población objeto de encuesta considera que si debería reglamentarse la ley 29372 para que de esta manera se incorpore las garantías de protección a la persona que arresta, mientras tanto el otro 50% considera que no.

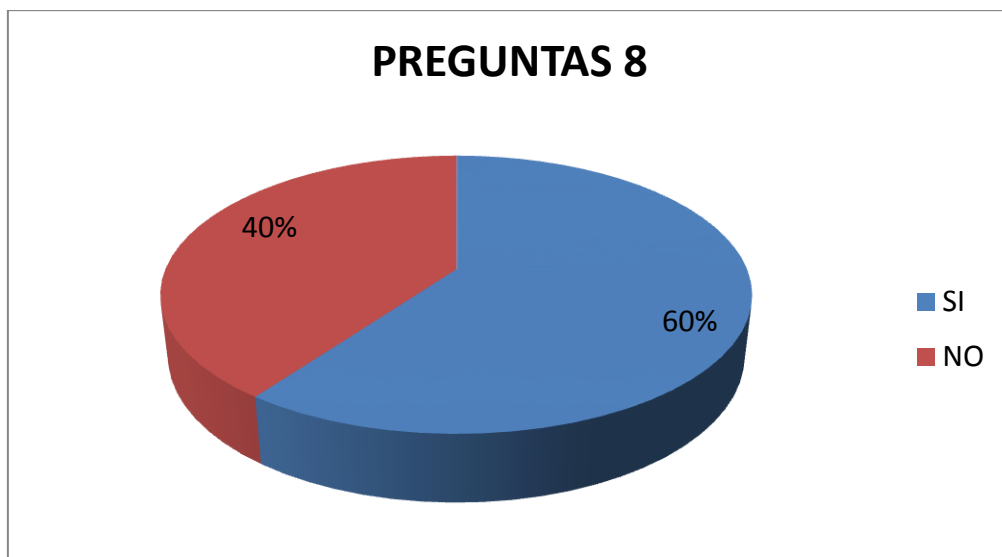


**Fuente:** Elaboración propia.

#### **Respecto a la octava pregunta:**

¿Considera usted que es necesario que haya una ley que salvaguarde su integridad, respecto al ejercicio de arresto ciudadano?

El 60% de los encuestados considera que si es necesario que haya una ley que salvaguarde la seguridad del ciudadano que arresta, mientras que el 40% dice que no

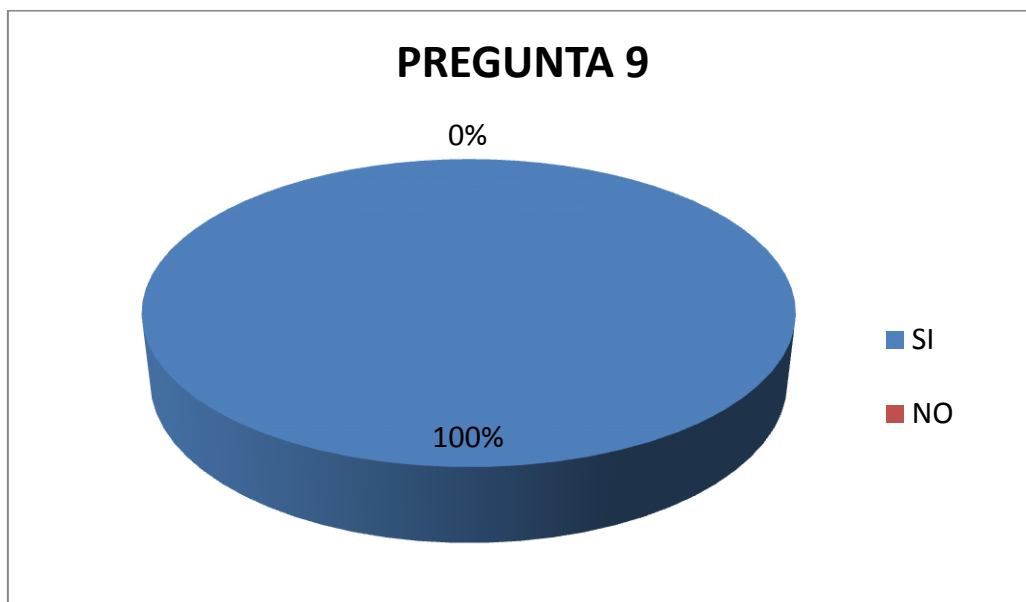


**Fuente:** Elaboración propia.

#### **Respecto a la novena pregunta:**

¿Cree usted que al ejercer un arresto ciudadano implica un riesgo contra su vida, su cuerpo y su salud?

El 100% de los encuestados considera que ejercer arresto ciudadano implica un riesgo inminente contra su vida, su cuerpo y su salud, mientras que el 0% manifiesta que no lo es.



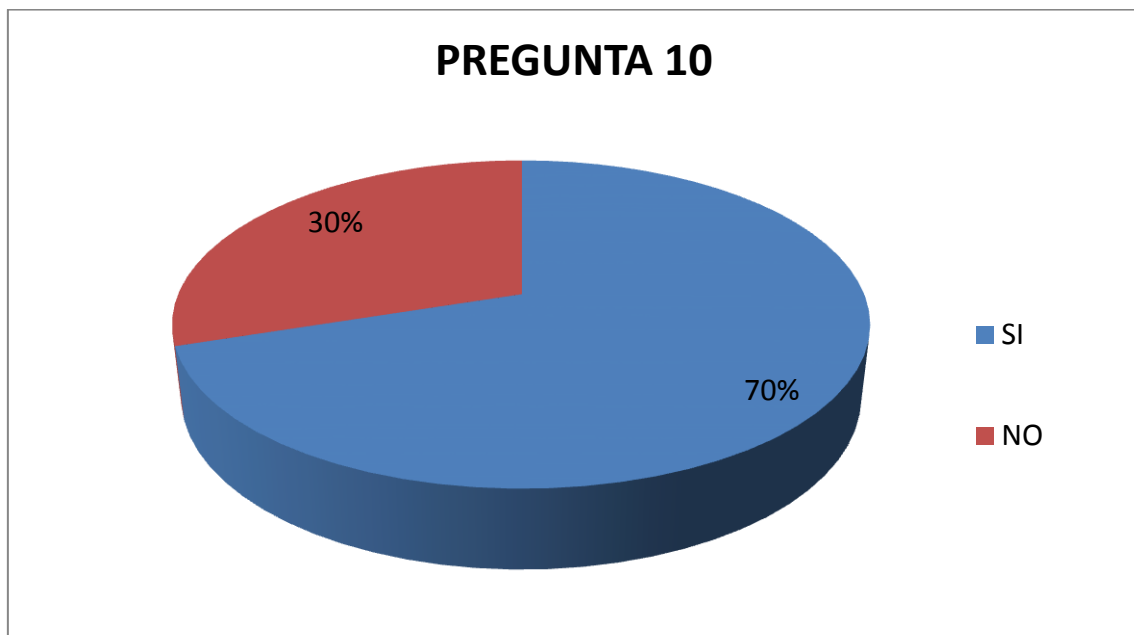
**Fuente:** Elaboración propia.

#### **Respecto a la décima pregunta:**



Considera usted, como ciudadano ¿Qué las garantías de protección que se proponen estén sujetas al tipo de perjuicio ocasionado por ejercer arresto ciudadano?

El 70% de la población objeto de encuesta considera que se deberían incorporar garantías de protección de acuerdo al tipo de riesgos que podría sufrir el ciudadano que arresta, por otro lado el 30% considera que no.



**Fuente:** Elaboración propia.

### **III Instrumento - Análisis documental**

#### **Análisis del Marco doctrinario.**

Según el análisis al autor Torres 2009 nos dice al respecto que “El ciudadano que arresta es un colaborador más de la persecución penal y por tales razones debe estar provisto de las garantías para resguardar su seguridad física y moral frente a los riesgos que conlleva arrestar a un delincuente peligroso” (p.79). Al respecto del **Objetivo General: Determinar de qué manera la falta de garantías de protección en la Ley N°29372 afecta a la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla – 2016**, brinda los siguientes resultados: pues de la cita antes referida se puede desprender que la incorporación de garantías de protección es elemental para que el ciudadano se encuentre protegido, de los riesgos que implica realizar un arresto ciudadano, pues el autor sugiere que la peligrosidad a la que se afronta la persona que ejerce esta facultad, requiere necesariamente de las garantías para su protección, dando confirmación al supuesto del presente trabajo, y al resultado del presente trabajo de investigación; en consecuencia al **Objetivo N°1: Determinar de qué manera la Ley N°29372 protege a la persona que ejercer arresto ciudadano**; es decir que las autoridades no colaboran de manera eficiente con la justicia y con la ciudadanía, es por ello que se toman medidas como las de otorgar al ciudadano la facultad de arrestar si la mínima protección de sus bienes jurídicos que podrían ser afectados, por el solo hecho de colaborar con su sociedad, en aras de combatir la delincuencia a nivel nacional, la falta de apoyo del estado y la ineficiencia de programas de ayuda, hace que todo sea una utopía, mas no una realidad, es por tales razones que se considera que el estado no facilita y mucho menos colabora con la protección de ciudadanos que arriesgan su vida para proteger los intereses de otros a través de estas políticas públicas que el estado mismo propone; confirmando la hipótesis del presente trabajo de investigación, en que ninguna entidad del estado se encarga de promover leyes que hagan una sociedad justa y equilibrada.

Por otro lado, en el **Objetivo N°1: Determinar de qué manera la Ley N°29372 protege a la persona que ejercer arresto ciudadano**; la seguridad jurídica que debe ofrecer el estado a los ciudadanos es la confianza que se merecen con la idoneidad de sus leyes, pues de tal manera la sociedad es la finalidad y fundamental prioridad del gobierno, según nuestra carta magna, sin embargo a veces la sociedad desconfía del aparato estatal así

como de las leyes al ser ineficientes respecto a su aplicación en la situación en concreto, o en su caso al tener vacíos legales que las hacen inaplicables; en nuestro estado de derecho se genera la desconfianza del ciudadano, dando a entender la manera ineficiente de trabajar de nuestros legisladores.

Respecto a lo aportado por el autor Lamas Puccio (2011) dice “Que para que la normativa de arresto ciudadano tenga mayor eficacia, sería necesario reglamentarla, a través de un decreto supremo para darle mayor elasticidad. Lo fundamental es poner en claro lo que significa el arresto, sus condiciones o circunstancias, límites al uso de la fuerza, tiempo del traslado a la autoridad, inclusive las responsabilidades en que incurrirían los ciudadanos cuando excedan estas atribuciones (p.55), por lo que se puede concluir que del **Objetivo N°2: Analizar de qué forma se podría incorporar a la Ley N°29372 un catálogo de garantías de protección a la persona que ejerce arresto ciudadano**, la forma de como incorporar esta iniciativa sería a través de un reglamento como lo menciona el presente autor, para que de esta manera se pueda mejorar la finalidad de la ley de arresto ciudadano y para no dejarlo desprotegido, la reglamentación es para darle mayor elasticidad y eficiencia y que su aplicación no tenga inconvenientes o subsanar cualquier vacío que se haya presentado.

Con lo dicho por el autor y especialista Reátegui Sánchez sostiene al respecto: “Que la detención policial y arresto ciudadano, es una facultad puramente material, pues se reduce a la mera captura que esta seguido de la presentación del capturado a quienes imparten la orden de detención, la policía tiene el deber de capturar a los sospechosos en flagrancia delictiva, mientras que los particulares se les reconoce solo una facultad, a modo de colaboración ciudadana con la justicia, no se les impone capturar a todos los delincuentes debido a los riesgos que puede acarrear tanto el agraviado como el arrestado o detenido”, es por ello que del **Objetivo N°3: Determinar qué tipo de garantías de protección se deben incorporar en la Ley N°29372 para la persona que ejerce arresto ciudadano**; se concluye que las garantías para la persona que ejerce arresto ciudadano es de acuerdo al tipo de riesgo que podría sufrir el ciudadano que por arrestar a un delincuente termina lesionado o perjudicado en todas las posibilidades a las que está expuesto, razón por la cual su integridad y su vida están en juego y es donde entra a tallar la participación del gobierno para prever tal situación.

## **Análisis de marco normativo Nacional e Internacional**

**Ley N° 29372, Promulgado El 1 de Julio del 2009**, Ley que modifica el artículo 259° y su entrada en vigencia, así como la del artículo 260° del Código Procesal Penal, aprobado por el decreto legislativo N°957, referidos a la detención policial y arresto ciudadano en flagrante delito, respectivamente, normativa que hace referencia al arresto ciudadano y a la modificación del artículo 259 del código procesal penal, nos proporciona una herramienta muy importante y eficaz respecto a la facultad de todo ciudadano a arrestar a un delincuente en flagrancia delictiva, del cual no se debe desaprovechar pero siempre y cuando ejercerlo de la mejor manera. Sin lugar a duda la ley en mención, se sujeta a lo establecido en la constitución y a su presupuesto elemental para que se pueda configurar la figura jurídica de arresto ciudadano.

**Decreto legislativo 957 Nuevo Código Procesal penal en su artículo 248**, en donde plasma medidas de protección para el testigo, víctima, perito y colaborador eficaz en temas de contribuir con el proceso penal, pero de una manera se busca incorporar a la persona que ejerce arresto ciudadano dándole protección equilibrando intereses y salvaguardando bienes jurídicos tutelados.

**En el estado de Colombia en la ley N° 975 del 2005** se incorpora mediante decreto N° 3570 del 1 de mayo del año 2007 el sistema de protección de víctimas, testigos, peritos y ciudadanos que arrestan, razón por la cual fundamentan en la incorporación del ciudadano que arresta por el grado de peligrosidad que implica su acción, por cuanto, el ciudadano tiene una función garantizadora en la persecución penal del delito y en la colaboración de la seguridad ciudadana, ya que dada la peligrosidad de su intervención dentro de los que es la persecución del delito como colaborador de la administración de justicia y servidores públicos en frenar la delincuencia; por tales razones se considera necesario respaldar en dicha legislación para incorporar esta iniciativa y subsanar el vacío legal que enfrenta el Perú al no haber una incorporación del ciudadano que arresta a estos beneficios y garantías que cumplirían una función protectora de cualquier riesgo.

**Código Procesal Penal, Promulgado El 1 de Junio Del 2004, Artículo 260**, en los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva.

En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata al tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se halle por inmediaciones del lugar; El dispositivo que regula el arresto ciudadano perteneciente al ámbito procesal penal, a la vez indicando los parámetros para ejercerlo sin cometer excesos, y estar sujeto a lo establecido con la ley procesal penal resulta pues la elemental para desarrollar esta facultad sin problemas, mostrando los alcances de su ejercicio y sus límites; La norma señala que toda persona podrá ejercer arresto ciudadano en flagrancia delictiva; asimismo para el ejercicio de esta facultad es necesario cumplir ciertos requisitos que lo hacen legal y lo subsume al principio de proporcionalidad y legalidad del mismo dispositivo en cuestión, pues la responsabilidad en la que se titula al ciudadano es importante y sobre todo genera reducción en las tasas de criminalidad, pero que vale que se combata y se arreste a los delincuentes flagrantes, si estos después buscaran represalias contra la persona que lo arresto y generara mayor índice de criminalidad, pues la idea es combatirla en todos sus extremos y de ,manera más eficaz posible, sin dejar cabos sueltos.

**En España, en el artículo 490 de la ley de enjuiciamiento criminal**, donde dispone que todo ciudadano está autorizado a detener a otro bajo los siguientes 3 supuestos en casos de flagrancia, fuga y rebeldía de manera textual. Puesto que la facultad de arrestar es una función propia de aquella persona que el mismo gobierno autoriza bajo el supuesto de flagrancia, fuga y rebeldía del infractor, el ciudadano desarrolla la función de colaborar con la captura de aquellos sujetos para su posterior enjuiciamiento y su sanción respectiva.

**Del decreto ley N° 19909 del 2011** promovida por el congreso de diputados en el gobierno del rey de España Juan Carlos I, donde se sugiere crear un sistema de defensa y protección al ciudadano que cumple la función de arrestar en casos de flagrancia, rebeldía y fuga, para su posterior incorporación a la defensa de los derechos de aquellas personas cuyas funciones están supeditadas a una ley que está en vigencia y que es de imitar para su posterior análisis.

### **Análisis del derecho comparado**

**El arresto ciudadano en la legislación francesa se estipula en el Código Procesal Penal Francés** señala en su artículo 73 que “En los casos de crimen flagrante o de delito

flagrante castigado con una pena de prisión, cualquier persona estará cualificada para detener al autor del mismo y conducirlo ante el oficial de policía más próximo; señalando que el arresto ciudadano como figura jurídica del ámbito procesal penal, se sustenta en el presupuesto básico que es la flagrancia delictiva para proceder a su ejecución y a su posterior ejercicio en la lucha contra la criminalidad.

**Según el artículo 287 del código procesal Argentino** también contemplan el arresto ciudadano donde faculta a los particulares a realizar una detención del que intentase cometer un delito de acción pública, del que fugase encontrándose legalmente detenido, o de quien es sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública; obligando al ciudadano que efectúa la detención, a entregar al detenido a la policía o a la autoridad judicial de forma inmediata; al igual que la legislación española los presupuestos del arresto ciudadano ya no se limitan en la sola flagrancia delictiva sino también en la fuga del infractor, quien pone al ciudadano en la misión de colaborar con la policía en la captura de delincuentes.

**En España, en el artículo 490 de la ley de enjuiciamiento criminal**, donde dispone que todo ciudadano está autorizado a detener a otro bajo los siguientes 3 supuestos en casos de flagrancia, fuga y rebeldía; con aquellos tres supuestos deben estar a la orden de la persona para proceder a su respectivo arresto con el respaldo de la ley, Del decreto ley N° 19909 del 2011 promovida por el congreso de diputados en el gobierno del rey de España Juan Carlos I, donde se sugiere crear un sistema de defensa y protección al ciudadano que cumple la función de arrestar en casos de flagrancia, rebeldía y fuga, para su posterior incorporación a la defensa de los derechos de aquellas personas cuyas funciones están supeditadas a una ley que sin lugar a duda expone a la persona a diversos peligros y por lo mismo el estado debe proteger y brindar la seguridad adecuada de sus interés como de su integridad.

**En el estado de Colombia en la ley N° 975 de 2005** se incorpora mediante decreto N° 3570 del año 2007 el sistema de protección de víctimas, testigos, peritos y ciudadanos que arrestan, razón por la cual fundamentan en la incorporación del ciudadano que arresta por el grado de peligrosidad que implica su acción, por cuanto, el ciudadano tiene una función garantizadora en la persecución penal del delito y en la colaboración de la seguridad ciudadana, ya que dada la peligrosidad de su intervención dentro de los que es la

persecución del delito como colaborador de la administración de justicia y servidores públicos en frenar la delincuencia, pues la garantía de asegurar al ciudadano común referente a los riesgos que corre por ser partícipe en la seguridad de su sociedad es la mejor respuesta de sus autoridades para asegurar sus intereses y la de un colectivo.

#### **IV. DISCUSIÓN**



En este capítulo se comprobarán los objetivos y los supuestos del tema de investigación; esto se realizará a través de la contrastación entre los datos obtenidos y los instrumentos con los antecedentes y el marco teórico, para ello se elaboran las explicaciones de cada divergencia o no divergencia:

Los entrevistados Montellanos, Gutiérrez, Gunther, Salvatierra, Moya y Villanueva (2017) sostienen que: de acuerdo al **objetivo general: “Determinar de qué manera la falta de garantías de protección en la Ley N°29372 afecta a la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla – 2016”**; determinan que el ciudadano que ejerce arresto contra delincuentes definitivamente están expuestos a las represalias y las consecuencias de efectuar esta facultad de parte de los mismos delincuentes, es por tales razones que deben estar provistos de las garantías necesarias para prevenir y de este modo solucionar este vacío legal, ya que esto trae como consecuencia que el ciudadano este desprotegido y no colabore con la captura de delincuentes por temor, asimismo concuerdan que la propuesta lanzada a través de este trabajo de investigación de incorporar garantías es totalmente necesario y que por lo mismo está respaldado por los entrevistados por el grado de peligrosidad que implica ejercer esta facultad en todas sus modalidades, siempre y cuando el ordenamiento no lo establezca o no lo regule como este caso en nuestro país, es por ello que la hipótesis del presente trabajo de investigación queda confirmada por los entrevistados y en base al marco teórico se puede apreciar la diversas iniciativas que intentan incorporar garantías de protección para el ciudadano que arresta siendo así la mayor justificación, en grado de la amenaza que podrían sufrir los ciudadanos y su familia, para lo cual nos da a entender que no divergen de acuerdo a la opinión de los entrevistados respecto a la preguntas y al objetivo general.

Con respecto a los entrevistados Montellanos, Gutiérrez, Salvatierra, Gunther y Moya (2017) consideran que de acuerdo al **objetivo específico 1: “Determinar de qué manera le Ley N°29372 protege a la persona que ejercer arresto ciudadano”**, mantienen su posición al considerar que el estado no apoya como debería ser, al ciudadano que ejerce arresto civil, en visto que se debe a la falta de normatividad que lo pueda regular, mencionan que existe un sistema de protección de víctimas y testigos pero que no propiamente protege al ciudadano que arresta porque solo menciona a las víctimas y testigos en la recaudación de medios probatorios para el proceso penal, pero no se toma en

cuenta el aspecto de proteger al ciudadano que arresta, y es ´por ello que lo entrevistados sugieren que deberían incorporarse a estos beneficios que la ley otorga a través de este sistema de protección, es decir que al no haber ninguna ley que regule esta iniciativa, los entrevistados lanzan como conclusión que el estado no protege debidamente a la persona que ejerce arresto ciudadano, confirmando así la hipótesis del presente trabajo de investigación pues la hipótesis sugerida nos muestra que efectivamente no hay respaldo de parte del estado al ciudadano que colabora con la seguridad ciudadana y con la administración de justicia pues al no haber garantías que lo puedan defender de ciertos peligros no colaboraría en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia y si fuese el casos en que si colabora con esto, estaría desprotegido totalmente.

Pero por otro lado para el entrevistado Villanueva (2017), de acuerdo al **objetivo específico 1: “Determinar de qué manera le Ley N°29372 protege a la persona que ejerce arresto ciudadano”**, considera que si hay un apoyo de parte del estado con respecto al ciudadano que arresta a través de la unidad de víctimas y testigos quien les proporcionan todas las garantías necesarias del caso frente a futuros riesgos que serían sometidos los testigos víctimas y t ciudadanos que tengan esa calidad, descartando la hipótesis del presente trabajo de investigación lo cual da una contradicción y una divergencia entre este especialista del derecho penal con la opinión de los demás especialistas entrevistados.

Con relación a los entrevistados Montellanos, Gutiérrez, Salvatierra, Gunther, Moya y Villanueva (2017), sostienen que de acuerdo al **objetivo específico 2: “Analizar de qué manera se podría incorporar un catálogo de garantías de protección en la Ley 29372 para la persona que ejerce arresto ciudadano.”**, la incorporación de garantías para el ciudadano debería ser a través de decretos legislativos o reglamentos que establezcan dichos beneficios de protección al ciudadano que arresta, tomando como referencia el programa de protección de víctimas y testigos que si bien es cierto provee de todas la garantías de protección necesarias a aquellas personas que colaboran con el proceso, es decir que la ley salvaguarde a aquellos ciudadanos que se sientan victimizados o amenazados por los delincuentes que son objeto de detención. De esta manera se deberán incorporar las garantías propuestas por este trabajo de investigación para el efectivo cumplimiento del estado de garantizar su seguridad personal frente a posibles riesgos y

peligros latentes. En conclusión los entrevistados no divergen en sus respuestas respecto al objetivo específico 2, puesto que todos concuerdan con las mismas ideas a la hipótesis que responden a la problemática propuesta por este trabajo de investigación.

Respecto a lo señalado por Montellanos y Gutiérrez (2017) de acuerdo al **Objetivo específico 3: “Determinar qué tipo de garantías de protección se deben incorporar para la persona que ejerce arresto ciudadano”**, nos dicen que la persona está expuesta a muchos riesgos por el solo hecho de ejercer arresto contra un delincuente, y los entrevistados mencionan que las garantías deberían estar provistas de acuerdo al tipo de violencia que podrían ser objeto como podría ser violencia física y la de sus familiares, amenazas contra su vida, extorsiones, daños al patrimonio; según los entrevistados deberían otorgarse garantías al grado de riesgo y peligro a lo que está expuesto la persona que ejerce arresto ciudadano, dando a entender que son necesarios porque es un peligro inminente a los bienes jurídicos.

Pero por otro lado Moya y Villanueva (2017) de acuerdo al **objetivo específico 3: “Determinar qué tipo de garantías de protección se deben incorporar en la Ley N°29372 para la persona que ejerce arresto ciudadano”**, sostienen que los peligros a los que está expuesto el ciudadano que arresta son las amenazas contra su integridad física y psicológica, asimismo son víctimas de reglaje contra su familia y contra el propio ciudadano que arresta, así como de todos los perjuicios y el gran abanico de posibles daños, es por ello tras esta perspectiva de los entrevistados nos da a entender que el estado debería incorporar garantías previniendo este tipo de daños al ciudadano que arresta, protegiéndolo de todo peligro y riesgo contra su integridad y su vida y la de sus familia. De acuerdo al objetivo específico 3, los entrevistados divergen con otros entrevistados de acuerdo al tipo de garantías que deberían incorporarse en la presente iniciativa legislativa.

## **V. CONCLUSIONES**

**Primero:**

Se concluye que la falta de garantías de protección en la Ley 29372 (ley de arresto ciudadano) afectaría inminente los derechos fundamentales de la persona que ejerce arresto o detención particular, es por ello que es de vital importancia que los riesgos a los que está expuesto el ciudadano al efectuar esta facultad, deben ser prevenidos y combatidos con mecanismos legales que cumplan la finalidad de resguardar esos derechos, tomando en cuenta los altos índices de criminalidad en el país, sobre todo para aquellos lugares donde está vigente el NCPP, como es el caso del distrito de Ventanilla en el año 2016, dado que es una herramienta importante la cual debe contar con estándares y lineamientos que permita ejercerla con el cuidado debido, a fin de no desproteger derechos.

**Segundo:**

Se concluye que al no contar con una legislación que señale de manera expresa las garantías de protección que debería tener la persona que ejerce arresto ciudadano de conformidad con la Ley 29372, nos encontraríamos ante una ley vacía cuya finalidad no es la esperada, esto es, debido a las ineficiencias de las instituciones públicas; incluida el sistema de unidad de víctimas y testigos, siendo que como todo sistema es susceptible de tener defectos, por tal motivo se recomienda que la ley N°29372 sea implementada para mejorar su funcionamiento y cumplir su finalidad, esto es de proteger a los ciudadanos que colaboran con la justicia y la lucha contra la criminalidad de manera más efectiva sin exponerlos a riesgos, que según nuestra carta magna es la finalidad primordial del estado salvaguardar su seguridad e integridad.

**Tercero:**

Se concluye que después de haberse hecho el estudio respectivo y tras analizar las posibilidades legislativas en el presente trabajo, es válido decir, que es factible incorporar un catálogo de garantías de protección en la Ley N°29372 (ley de arresto ciudadano) para el ciudadano que arresta, ya sea a través de decretos legislativos o un posible reglamento de la propia Ley N°29372, siempre y cuando las autoridades pertinentes vean la necesidad de ponerlo en práctica a fin de no dejar un vacío legal y una desprotección al ciudadano

quien colabora para arrestar a delincuentes peligrosos, sobre todo en una sociedad donde abunda la criminalidad y la criminalidad organizada.

**Cuarto:**

Se concluye que de acuerdo al estudio realizado se puede decir que las garantías de protección que se proponen, son de acuerdo al tipo de riesgo y peligro a la que puede ser víctima el ciudadano que arresta o las consecuencias del mismo, es por ello que en el presente trabajo de investigación proponemos que las garantías deben obedecer a esta clase de situaciones, en la que contribuyan a proteger su seguridad social; económica y jurídica; de las cuales han sido materia de análisis en el presente proyecto de investigación, en concordancia con la legislación comparada y los ordenamientos jurídicos de otros países

## **VI. RECOMENDACIONES**

**Primero:**

Se recomienda que la Ley N°29372 (ley de arresto ciudadano), sea reglamentada mediante un decreto a fin de tutelar derechos imperativos que se exponen al momento de ejercer arresto ciudadano, y que a su vez contribuya con la eliminación progresiva de la delincuencia de manera eficiente y sin vulnerar los derechos fundamentales de los demás; toda vez que el riesgo que corre el ciudadano que arresta es inminente y desproporcional, siendo que al no haber una legislación que regule las garantías de protección para el ciudadano que arresta, lo dejaría en un estado de indefensión absoluta; y en visto que su participación activa frente a delitos en flagrancia contribuye con la seguridad interna del país, así como de aquellos sectores más vulnerables como es el distrito de Ventanilla - Callao, se torna necesario que se priorice la seguridad de la persona que arresta por una ley que lo señale así de forma expresa.

**Segundo:**

Se recomienda la iniciativa legislativa planteada; para que el estado brinde la protección adecuada a su pueblo y a los ciudadanos que la conforman dando los mecanismos necesarios para la protección de su integridad física, moral u otra índole frente a los peligros que implica el ejercicio del arresto ciudadano, siendo que las instituciones representativas del Estado deberán cumplir con esa misión en aras de mantener un país sin injusticias ni arbitrariedades, pues la falta de protección a las personas que ejercen arresto ciudadano, da clara señal de un gobierno ineficiente, puesto que el presente trabajo de investigación busca crear una iniciativa legislativa que vaya en armonía con el ordenamiento jurídico a fin de garantizar el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.

**Tercero:**

Se recomienda la iniciativa legislativa planteada, ya que en la legislación comparada existen leyes que cumplen la finalidad de brindar seguridad a las personas que arrestan, se puede inferir que hay posibilidades para incorporar garantías que de una manera que benefician a las personas que están en un riesgo de parte de sus intervenidos o arrestados,



a pesar de ser una figura permitida y con respaldo legal se sugiere tener las disposiciones legales para ofrecer seguridad a través de reglamentos y/o decretos que promuevan esta propuesta por ser necesaria para la seguridad de la persona, que sin importarle arriesgar su vida afronta las consecuencias que implica arrestar a un delincuente en flagrancia, que sin lugar a duda podría lesionarlo o acabar con su vida.

**Cuarto:**

Se recomienda la iniciativa legislativa planteada, ya que los riesgos que tiene el ciudadano que arresta son muchos y deberían tomarse en cuenta mediante un estudio pormenorizado para la incorporación de estas garantías de protección, las cuales se proponen en el presente trabajo de investigación, y que deben responder a la protección de su seguridad social, económica y jurídica, al ser una prioridad de los órganos e instituciones del gobierno para garantizar un estado de derecho; es consecuencia se debe tener consideración a los riesgos que se expone el ciudadano común que colabora con la lucha por contrarrestar la criminalidad en el país

## **VII.REFERENCIAS**

### **Fuente Primaria**

Moya. C, Callao: Callao, 18 de mayo del dos mil diecisiete

Cornejo. G, Lima: Cercado de Lima, 19 de mayo del dos mil diecisiete

Gutiérrez. G, Callao: La punta, 20 de mayo del dos mil diecisiete

Salvatierra. R, Lima: Los olivos, 21 de mayo del dos mil diecisiete

Montellanos. P, Callao: La punta, 22 de mayo del dos mil diecisiete

Villanueva. H, Callao: La punta, 23 de mayo del dos mil diecisiete

### **Fuente Metodológica**

Alvarado, G. (2004) Importancia de la Metodología de la Investigación Jurídica en la formación del abogado: Revista La Semana Jurídica.

Arias, M. (2011). El Rigor Científico en la investigación Cualitativa. Bogotá: Invest Educ Enferm.

Behar, D. (2008). Metodología de la investigación. Madrid: Edit. Shalon.

Bernal, C. (2002). Metodología de la investigación. (2º. ed.). México: Pearson Educación.

Chacón. (2012). Material del curso técnico de investigación jurídica. Lima.

Gómez, S. (2006). Metodología de la Investigación. México: Red de Tercer Milenio.

Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de investigación. (1. ed). Argentina: Brujas.

Gómez M. (2006). Evaluación Ética de Proyectos de investigación: Una experiencia pedagógica. Bogotá: Universidad de Antioquía.

- Hernández, F. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. México D.F: McGraw Hill.
- Kerlinger, F. (2002). Proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Caracas: Espiteme.
- López, J. (1995). La aventura de la investigación científica: Guía del investigador y del Director de Investigación. Madrid: Ed. Síntesis.
- Martínez y Céspedes. (2008). Metodología de la investigación. Lima: Ediciones Libro Antiguo.
- Pérez, G. (2012). Investigación Cualitativa: Retos e interrogantes, Técnicas y Análisis de Datos. Madrid: La Muralla S. A.
- Quintana y Montgomery (2006). Material del curso técnico de investigación jurídica. Lima.
- Rodríguez, G. (2011). Metodología de la investigación cualitativa. Metodología: Ediciones Aljibe.
- Sandoval, C. (2002). Investigación Cualitativa. Bogotá: Arfo Edit.
- Sampieri, R. (2010). Metodología de la investigación. (5. ed.). México D. F: McGraw Hill.
- Sánchez, Z. (2011). La Metodología en la Investigación Jurídica: Características peculiares y pautas generales para investigar en el derecho. Revista temática de Filosofía del Derecho.
- Vara, A (2010). ¿Cómo evaluar la rigurosidad científica de las tesis doctorales? (1. ed.). Lima: Fondo Editorial.

## **Fuente Temática**

Chang, K. (2010). Análisis comparado del tratamiento que se da a la detención ciudadana en Perú y España: especial referencia a los serenos municipales y a los agentes de seguridad. Recuperado de [http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wp.content/uploads/2014/05/ct18\\_analisis\\_comparativo.pdf](http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wp.content/uploads/2014/05/ct18_analisis_comparativo.pdf).

Yépez, D. (2004). Seguridad Ciudadana. Lima: Instituto de Defensa Legal.

Bazán, C. (2009). El Arresto Ciudadano y la Cadena Ronderil. Lima: Editorial. Recuperado de <http://www.projur.org/el-arresto-ciudadano.doc>

Yépez, D. (2007). Plan local de seguridad “Distritos seguros”.

Maita, P. (2016). Seguridad social. Lima: 1º edición.

Jiménez, D. (2006). Seguridad Ciudadana y Derecho Penal. Madrid: Dykinson.

Espinoza, Z. (2010). Temas de derecho penal y procesal penal. Huánuco: Perú.

Zúñiga, R. (1993). Libertad Personal y Seguridad Ciudadana. Barcelona: PPU.

Chinchay, C. (2010). La naturaleza del arresto ciudadano, con cierta mirada sobre alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: Universidad San Martín de Porres.

Patio, G. (2010). La Inconveniencia del Arresto Ciudadano. Lima: Universidad San Martín de Porres.

CONASE. (2006) Construcción de la agenda pública de seguridad ciudadana. Lima – Perú.

- Saavedra, P. (2010). Reflexiones Acerca de la Viabilidad del Arresto Ciudadano. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Diccionario de la Lengua Española (22°ed). Madrid: Artes Gráficas.
- Muñoz, A. (2010). Seguridad ciudadana y su presupuesto en el Perú. Lima: Instituto de defensa Legal.
- DECRETO SUPREMO 007-2006-JUS del 4 de Marzo de 2006 y Decreto Supremo 005-2007-JUS del 5 de Mayo de 2007.
- Gimeno, S. (2004). Derecho Procesal Penal. Madrid: COLEX.
- Plasencia, V. (2004). Teoría del delito. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Falcone, S. (2012). Concepto y Sistematización de la Detención Ilegal en el Código Procesal Chileno (1ra ed). Chile
- Torres, D. (2009). Alcances sobre el Arresto Ciudadano y su Inconstitucionalidad.
- Richard e Iñaki (2006). Derecho Procesal Penal, Gobierno de Navarra: Pamplona.
- Mestanza, J. (2014). El arresto ciudadano y la vulneración a la libertad individual. Lima: Universidad Cesar Vallejo.
- Capira, V. (2014). El arresto ciudadano en relación a la libertad personal. Arequipa: Universidad Alas Peruanas.
- Lamas, P. (2011). Criminalidad organizada, seguridad ciudadana y reforma penal. (23 ed). Lima: Revista peruana de ciencias penales.

Cárdenas, M. (2009). El arresto ciudadano y la flagrancia en la ley N° 29372. Lima.

Constitución política del Perú. (1993). Recuperado de:

<http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/constitu/Cons1993.pdf>

Bramont, A. (1998). Manual de derecho penal. Parte especial. Lima: San Marcos.

Bajo, M. (1991). Manual de Derecho Penal. (2. ed.). Madrid: Ramón Areces.

Cabanellas, G. (2011). Diccionario jurídico elemental. (14. ed.). Santafé de Bogotá: Heliasta.

## **ANEXOS**



## 1. INSTRUMENTOS:

### 1.1. ENCUESTA.



UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO FACULTAD DE DERECHO

## ENCUESTA DE OPINIÓN

Nombre:

---

---

Cargo:

### INSTRUCCIONES GENERALES

Esta encuesta constituye un primer acercamiento de investigación jurídica y social en cuanto a la incorporación de **GARANTIAS DE PROTECCION PARA LA PERSONA QUE EJERCE ARRESTO CIUDADANO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - 2016**; es decir, se constatará la opinión de usted con respecto a este actual problema socio-jurídico que afecta directamente al ciudadano que ejerce arresto contra delincuentes peligrosos y de los cuales les podría ocasionar algún daño físico y moral.

Conteste con toda sinceridad marcando una **x** en la opción elegida.

## CUESTIONARIO

**OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera afecta la falta de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla – 2016.**

1. ¿Usted como ciudadano Ventanillense, considera que es necesario legislar la incorporación de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano?  
  
a) Sí ( )  
b) No ( )
  
2. ¿Cree usted que, regulando la iniciativa de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano de algún modo se puede prevenir los riesgos que implican esta facultad?  
  
a) Si ( )  
b) No ( )
  
3. ¿Considera usted necesario mantener firme esta iniciativa para garantizar protección al ciudadano que arresta, así como protección a sus familiares?  
  
a) Sí ( )  
b) No ( )

**OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Determinar de qué manera el Estado protege a la persona que termina perjudicado por ejercer arresto ciudadano.**

4. ¿Cree usted, que el Estado ayuda suficientemente a las personas que resultan perjudicados por ejercen arresto ciudadano?  
  
a) Sí ( )  
b) No ( )
  
5. Considera apropiado que el Estado incorpore un sistema de protección para el ciudadano que arresta?  
  
a) Si ( )  
b) No ( )
  
6. Cree usted que el estado al no integrar las garantías de protección para el ciudadano que arresta, comete una grave afectación a su seguridad física y moral?

- a) Si ( )  
b) No ( )

**OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: Analizar de qué manera se podría incorporar un catálogo de garantías de protección a la persona que ejerce arresto ciudadano.**

7. ¿Cree usted, que para incorporar garantías de protección al ciudadano que arresta, se debería reglamentar el decreto legislativo N°29372 (Ley de arresto ciudadano)?

- a) Si ( )  
b) No ( )

8. ¿Considera usted que es necesario que haya una ley que salvaguarde su integridad, respecto al ejercicio de arresto ciudadano?

- a) Si ( )  
b) No ( )

**OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: Determinar qué tipo de garantías de protección se deben incorporar para la persona que ejerce arresto ciudadano.**

9. ¿Cree usted que al ejercer un arresto ciudadano implica un riesgo contra su vida, su cuerpo y su salud?

- a) Si ( )  
b) No ( )

10. Considera usted, como ciudadano ¿Qué las garantías de protección que se proponen estén sujetas al tipo de perjuicio ocasionado por ejercer arresto ciudadano?

- a) Si ( )  
b) No ( )

## 1.2. ENTREVISTA.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

### ENTREVISTA DE EXPERTOS

1. ENTREVISTADO:
2. Dr. (a).....
3. Cargo: .....
4. Fecha: .....

(REPRODUCCION RESUMIDA DE LA ENTREVISTA)

Dr.(a)....., el objetivo de la presente entrevista es conocer su APRECIACIÓN sobre la **GARANTIAS PARA LA PERSONA QUE EJERCE ARRESTO CIUDADANO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - 2016**; es decir, se constatará la opinión de usted con respecto a este actual problema respecto a la falta de garantías para la persona que ejerce arresto ciudadano y a los riesgo que se expone al efectuar esta facultad, respecto a su integridad física y otros aspectos.

### PREGUNTAS:

**Objetivo General: Determinar de qué manera afecta la falta de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla – 2016.**

1. Usted considera que es necesario incorporar garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano? ¿Por qué?

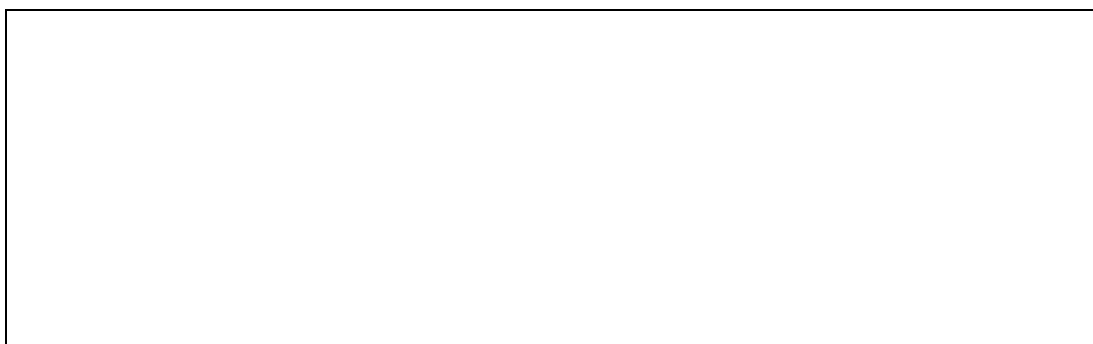


**Objetivo N°1: Determinar de qué manera el Estado protege a la persona que termina perjudicado por ejercer arresto ciudadano.**

2. ¿Cree usted que el estado protege al ciudadano común que resulta perjudicado o lesionado por ejercer arresto ciudadano? ¿porque?



3. ¿Usted cree que debería existir un sistema de protección que brinde el estado para la persona que ejerce arresto ciudadano ante eventuales amenazas y perjuicios de alguna índole? ¿porque?



**Objetivo N°2: Analizar de qué manera se podría incorporar un catálogo de garantías de protección a la persona que ejerce arresto ciudadano.**

4. ¿De qué manera cree usted que se deberían incorporar garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano? explique

5. ¿Considera usted que se debería incorporar la iniciativa de garantías de protección para el ejercicio de arresto ciudadano, a través de un reglamento de la ley 29372 (ley que regula el arresto ciudadano)? ¿Por qué?

**Objetivo N°3: Determinar qué tipo de garantías de protección se deben incorporar para la persona que ejerce arresto ciudadano.**

6. Para las “garantías de protección” en una futura legislación reglamentaria de la Ley 29372, ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta respecto a la persona que ejerce arresto ciudadano?

7. ¿Qué tipo de perjuicios podría sufrir la persona que ejerce arresto ciudadano? explique



\_\_\_\_\_  
Firma del entrevistado

\_\_\_\_\_  
Firma del entrevistador

### **MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS**

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ELTHON CRUZ FLORES BERMEO.

FACULTAD/ESCUELA: DERECHO.

<b>“GARANTÍAS DE PROTECCIÓN PARA LA PERSONA QUE EJERCE ARRESTO CIUDADANO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA – 2016”</b>						
<b>PROBLEMA GENERAL</b>	<b>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</b>	<b>OBJETIVOS GENERAL</b>	<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>SUPUESTO GENERAL</b>	<b>TIPO DE ESTUDIO</b>	<b>POBLACION Y MUESTRA</b>
¿De qué manera afecta la falta de garantías de protección para la persona que ejerce arresto	4) ¿De qué manera el Estado protege a la persona que termina perjudicado por ejercer arresto ciudadano?	Determinar de qué manera influye la falta de garantías de protección para la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla – 2016.	1. Determinar de qué manera el Estado protege a la persona que termina perjudicado por ejercer arresto ciudadano.	La falta de garantías de protección, afecta sin lugar a duda a la persona que ejerce arresto ciudadano en el distrito de Ventanilla por la entrada en vigencia del NCPP en ese distrito judicial en el año 2016; afectaría sus derechos constitucionales como la vida, el	La presente investigación desarrollará como tipo de estudio cualitativo, es decir orientado a la comprensión puesto que se trabajará sobre la base de los hechos que se suscitan en nuestro entorno	En el presente trabajo de investigación se desarrollara con la cooperación de especialistas del derecho penal y procesal penal, ya sean fiscales, personal fiscal y jueces en materia penal esto a través de las entrevistas, asimismo la encuesta se desarrollara para diez ciudadanos de Ventanilla a fin de que
	5) ¿De qué manera se podría incorporar un catálogo de garantías de protección a la persona que ejerce arresto ciudadano?		4. Analizar de qué manera se podría incorporar un catálogo de garantías de protección a la			
	6) ¿Qué tipo de garantías de protección se					



ciudadano en el distrito de Ventanilla – 2016?	deben incorporar para la persona que ejerce arresto ciudadano?	.	<p>persona que ejerce arresto ciudadano.</p> <p>3. Determinar qué tipo de garantías de protección se deben incorporar para la persona que ejerce arresto ciudadano.</p>	<p>cuerpo y la salud, asimismo la de sus familiares, además se presentaría una obstaculización de la administración de justicia.</p>	<p>de forma diaria, que se comprobaran con la utilización de instrumentos de recolección de datos.</p> <p><b><u>DISEÑO DE ESTUDIO:</u></b></p> <p>En el presente trabajo de investigación se desarrolla en un diseño no experimental descriptivo.</p>	<p>manifiesten su apreciación respecto al tema materia de investigación.</p>
--	--	---	---	--	---	--

## 2.3. VALIDACION DEL INSTRUMENTO.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

### VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

#### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Israel B. César  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV.  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: ENTREVISTA  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ELTHON CRUZ FLORES BERMEO.

#### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										X			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.										X			
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.										X			
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.										X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

#### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

#### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

85 %

Lima, 11 de Mayo del 2017

[Firma]  
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 10796211 Telf. 992227199

## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: CASTRO RODRIGUEZ LESLY  
 1.2. Cargo e institución donde labora: DTC  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: ENTREVISTA  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ELTHON CRUZ FLORES BARRERO

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.									X				
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.									X				
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.									X				
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.									X				
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales									X				
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.									X				
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.									X				
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.									X				
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.									X				
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.									X				

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

☒ SI

☐ NO

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

**80 %**

Lima, 15/05/14 del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 9277746 Telf. 980712520

## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: GAMARRA Ramon Jose Carlos  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente PLACENTARIO  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de observación  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ELIYON CRUZ FLORES BELIMBO

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

SI

95 %

Lima, 15 de Mayo del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 97977087 Telf. 963 870606